

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

10 de Setiembre de 2008

34ª Reunión – 2º Sesión Especial

Vicgobernador:	CAMPANA , Héctor.
Presidente Provisorio:	FORTUNA , Francisco José.
Vicepresidente:	CARBONETTI , Domingo.
Vicepresidente 1ª:	VARAS , Augusto.
Vicepresidente 2ª:	POZZI , Hugo.
Secretario Legislativo:	ARIAS , Guillermo.
Secretario Administrativo:	DIB , Héctor Daniel.
Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	DANIELE , Fredy.
Secretaría Técnica Parlamentario:	COCCIOLO , María Belén.
Prosecretaría Legislativa:	PASTOR , Graciela del Carmen.
Prosecretaría Administrativa:	JURE , Laura.
Prosecretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	SCANDIZZO , Héctor.
Prosecretario Técnico Parlamentario:	MANZUR , Horacio.

Legisladores presentes:

ALARCIA, María Leonor.	FAUSTINELLI, Hipólito.
ALBARRACIN, Raúl Humberto.	FERAUDO, Evelina Margarita.
ALESANDRI, Carlos Tomás.	FLORES, Ernesto Ramón.
ALTAMIRANO, Alfredo.	FORTUNA, Francisco José.
ASBERT, Enrique Mario.	FROSSASCO, Horacio Marcelo.
BIRRI, Roberto César.	GENESIO DE STABIO, Modesta M. Teresa
BISCHOFF, Eduardo Efraín.	GENTA, Mabel del Carmen.
BRESSAN, Estela Beatriz.	GIAVENO, Carlos José.
BRUGGE, Juan Fernando.	GRAGLIA, José Emilio.
BUSO, Sergio Sebastian.	GUDIÑO, Italo.
CALVO AGUADO, María Soledad.	HEREDIA, Dante Fortunato.
CARBONETTI, Domingo Angel (h).	IPÉRICO, Nelson José.
CARGNELUTTI, Alicia.	JIMÉNEZ, Raúl Ernesto.
CARRERAS, José Benito.	LIZZUL, Nancy Fabiola.
CHIOFALO, María Amelia.	LOBO, Héctor Reinaldo.
CORIA, Adela.	MAIOCCO, José Antonio.
CUELLO, Hugo Oscar.	MANZANARES, María Graciela.
CUGAT, Alfredo Jesús.	MONIER, José Omar.
DANDACH, Kasem Merched.	NARDUCCI, Alicia Isabel.
DRESSINO, Ana María.	NICOLÁS, Miguel Osvaldo.
FALO, Marcelo	NIETO, Gladys del Valle.

OCHOA ROMERO, Pedro.
OLIVERO, María Liliana.
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PASSERINI, Daniel Alejandro.
PODVERSICH, Norberto Luís.
POZZI, Hugo Alberto.
RIVERO, Silvia Graciela.
RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
ROSSI, Dante Valentín.
ROSSO, Milena Marina.
RUIZ, Omar Antonio.
SAIEG, Walter Eduardo.
SCARLATTO, José Luís.
SECULINI, César Omar.
SELLA, Orlando Enrique
SENN, Horaldo Alejo.
SERRA, César Miguel José.

SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen.
VARAS, Augusto Enrique.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
VILLENNA, José Eduardo.

Legisladores ausentes justificados:

FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
PONCIO, Norma María.
MATAR, María Alejandra. *(Licencia
s/goce de haberes desde el 05 al 13 de se-
tiembre de 2008, R-2113/08).*
SERNA, Rodrigo Leandro *(solicito el co-
rrespondiente descuento de dieta)*

Legisladores ausentes no justificados:

SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional2295
2.- Versión taquigráfica. Aprobación2295

3.- Defensor del Pueblo. Designación. Ju-
ramento de ley 2295

– En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de setiembre de 2008, siendo la hora 17 y 40:

- 1 -

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 66 señores legisladores, declaro abierta la 2° sesión especial convocada a los efectos de la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia.

Invito al señor legislador Raúl Jiménez a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Jiménez procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

- 2 -

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la última sesión ordinaria.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

- 3 -

DEFENSOR DEL PUEBLO. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.

Sr. Presidente (Fortuna).- De conformidad a lo resuelto por el Cuerpo tras la 20° sesión ordinaria del día 20 de agosto pasado, corresponde la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: no sería sincero si no le dijera que siento una gran responsabilidad por tener hoy la posibilidad de nominar a quien tendrá a su cargo la conducción de una de las instituciones más importantes de la Provincia.

Aquel que me conoce no debe tener dudas que lo haré desde lo más profundo de mis convicciones, porque sé que quien va a acceder a tan alto cargo cumple con los requisitos indispensables

para ello, como son la responsabilidad, capacidad e idoneidad.

La creación del Instituto del Defensor del Pueblo en nuestra Provincia no fue una casualidad, sino la consecuencia lógica de una modificación que modernizó y puso a nuestra Constitución a la par de las más avanzadas del mundo.

Seguramente en este recinto muchos conocen que fue en Suecia donde nació la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo con las características que hoy conocemos. Esta institución, elevada al rango constitucional por el país nórdico, también fue adoptada por otro país escandinavo, Finlandia, que la incluyó en su Carta Magna en el año 1919.

Por otra parte, Dinamarca la introdujo en su Constitución en 1953, despertando el interés internacional por esta figura, y en base a ello otros países también implementaron esta institución de control.

Como lo expresé, la figura legal nace primero en Suecia, y es llamada luego de distintas maneras: en Israel, Contralor del Estado; Proveedor de Justicia en Portugal; Mediador en Francia; Defensor Cívico en Italia; Comisionado Parlamentario en Gran Bretaña, y en España y Argentina, Defensor del Pueblo.

En Córdoba, el artículo 124 de nuestra Constitución habla de su designación, remoción y, fundamentalmente, establece sus funciones: comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones.

De esta manera, el Defensor del Pueblo constituye una puerta abierta al contacto diario y permanente con el hombre concreto, destinatario final de toda política del Estado, y quienes fueron designados a partir de 1994, Dante Fornasari y Nelson Filippi, fueron fieles cumplidores de este cometido.

Pero desde hace más de tres años el cargo se encuentra vacante, siendo nuestra obligación como integrantes de este Cuerpo legislativo designar al Defensor del Pueblo, poniendo fin a esta situación y asegurando que este instituto cumpla acabadamente con el precepto constitucional que lo creó.

Es de público conocimiento que se encuentra a cargo de dichas funciones la Defensora del Pueblo Adjunta, siendo esta una situación no querida por la Constitución ni su ley reglamentaria. Esto es así puesto que el artículo 7º, segundo párrafo, expresa: "Producida la vacancia por cualquier causa, la Asamblea Legislativa procederá de inmediato a designar al sucesor".

También debemos citar el artículo 8º de la misma ley, que determina que el Defensor del Pueblo Adjunto será designado por el titular para que lo auxilie en el ejercicio de sus funciones y lo suplante en caso de imposibilidad temporal.

Ahora bien, es también nuestra obligación consensuar entre los bloques políticos que integran la Legislatura la decisión acerca de la persona que desempeñará este cargo. Por ello, venimos a proponer al señor Mario Alberto Decara, D.N.I. 11.628.413, que, además de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, reúne una serie de cualidades que se han puesto de manifiesto a través de su trayectoria pública y privada.

Su trayectoria pública se inició allá por 1983, con el advenimiento de la democracia, cuando fue ungido intendente de la localidad de Huerta Grande y reelecto en 1987.

Una vez finalizado su segundo mandato, fue elegido senador representando a su departamento, desde 1987 a 1991. Desde 1991 hasta 1995 fue legislador provincial reelecto, y finalizó como legislador provincial en 2001.

Cuando dejó la función pública para dedicarse a la función privada su desempeño siempre fue coronado por el éxito.

A partir de este momento, y una vez producida la nominación de Mario Decara por parte de quien habla, quiero fundamentar las razones por las cuales este honorable Pleno debe adoptar el criterio de que con las dos terceras partes de los presentes debe elegir al Defensor del Pueblo.

Hay un antecedente legislativo según la Constitución reformada en 2001. No estamos aquí para debatir acerca de si la Constitución debe ser interpretada extensiva o restrictivamente; estamos para tomar una resolución respecto de una situación irregular en una valiosa institución de nuestra Provincia.

Todos somos conscientes que esta discusión ya fue dada y que es necesario dejar de lado los cuestionamientos sobre la interpretación de los artículos constitucionales. Debemos tener claro

que estamos en un debate político.

La interpretación de las normas es una fuente complementaria del Derecho. Así, para interpretar las leyes que han de ser aplicadas adquiere determinada importancia la exégesis de esa misma norma que efectúan los organismos competentes, a través de sus decisiones.

En el año 2000 la Asamblea Legislativa, máximo órgano político provincial, definió una manera de hacer las cosas, interpretó los artículos constitucionales para la designación del Defensor del Pueblo. Así fue como el doctor Filippi se desempeñó en ese cargo durante todo su período sin ningún cuestionamiento legal, constitucional o judicial.

La voluntad debe ser manifestada expresamente cuando se trata de una decisión política. Los legisladores presentes en este recinto son los únicos que pueden hacerlo. Por ello, reivindico la interpretación realizada por dicha Asamblea en el sentido que debe considerarse los dos tercios de los presentes a los fines de la designación objeto de esta sesión especial. Aquí están los que votarán a favor o en contra; no debe darse un valor superior a quienes no están presentes.

Es por eso que hoy, en este recinto, cuando este mismo poder del Estado ya se ha expresado en relación a la interpretación de este artículo constitucional, los alegatos respecto a cómo deben contarse los miembros de este Cuerpo se parecen más a una excusa, a una coartada, que a una cerrada y aséptica defensa del mismísimo Derecho Constitucional; es aquí donde el consenso entre diversas fuerzas políticas sobre las trascendentes funciones del Defensor del Pueblo tienen una jerarquía y valor evidentemente superior que el mero juego político partidario de quienes lo único que persiguen es manchar su designación.

Hoy, algunos prefieren continuar en el actual estado de cosas con una figura cuestionada jurídicamente en su legitimidad y legalidad, antes que aceptar el nombramiento de quien ha obtenido un verdadero consenso para que esta institución, tan valiosa, recupere su jerarquía constitucional.

Estamos frente a la necesidad de tomar una decisión que tiene que ver con una importante institución de la Provincia. Hay una propuesta, hay consenso y también jurisprudencia legislativa que ya estableció el mecanismo.

Por lo tanto, señores legisladores, no po-

demos seguir debatiendo una cuestión sobre la que seguramente puede haber distintas bibliotecas; debemos asumir la responsabilidad, señor presidente, y tomar la decisión correcta, que es darle a la Provincia nuevamente un Defensor del Pueblo. Por eso quiero que este Pleno acepte el criterio que se requiera el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes a los efectos de que sea designado Mario Alberto Decara como Defensor del Pueblo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).— Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.— Señor presidente: voy a hacer algunas reflexiones que me merece la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, figura que efectivamente —como se acaba de decir— procede de la Constitución de Suecia, que en el año 1809 la instituyó para dar respuesta inmediata a los ciudadanos que, ante los abusos de la administración, veían frustrados sus derechos.

En rigor de verdad, me veo obligado a alterar el curso de mi alocución, ya que no puedo evitar hacer algunas reflexiones relativas al pensamiento que acaba de exponer el miembro informante de la Unión Cívica Radical. En estos siete meses, señor presidente, en varias oportunidades he advertido que el oficialismo intentó saltar la letra de la Constitución de la Provincia de Córdoba para lograr imponer su mayoría legislativa automática, pero lo que no había visto durante todo este tiempo es a un sector de la oposición política de esta Legislatura inmolarse de semejante manera.

La propuesta que acaba de presentar quien me precedió en el uso de la palabra no sólo es una pésima interpretación de la letra de la Constitución de la Provincia de Córdoba —como lo fue también cuando fue elegido Defensor del Pueblo el señor Filippi— sino que —lo cual es aún más grave— también lesiona seriamente uno de los deberes y responsabilidades que cualquier legislador que forme parte de la oposición política, en cualquier Legislatura de la República Argentina, tiene para con su pueblo, cual es el de controlar los actos de gobierno, así como los abusos y excesos del oficialismo.

¿Cómo vamos a controlar, de ahora en más, los excesos y abusos del oficialismo cuando intente vulnerar la letra y el espíritu de la Constitu-

ción de la Provincia de Córdoba si nosotros mismos, como oposición, la estamos vulnerando?, ¿cuánto puede valer un cargo político para pagar semejante precio?, ¿con qué autoridad moral vamos a exigirles a los 37 legisladores del oficialismo que en el futuro cumplan al pie de la letra el orden constitucional de la Provincia de Córdoba si nosotros mismos propiciamos que se vulnere?

Recuerdo —mi curiosidad, en verdad, deberá esperar pacientemente— que el señor presidente del bloque al que pertenece el legislador preopinante, en una reunión de emergencia de la Comisión de Labor Parlamentaria —que se desarrolló hace aproximadamente tres semanas, en virtud de la primera convocatoria para la designación del Defensor del Pueblo— expresó que de ninguna manera —nadie me lo contó, sino que lo escuché personalmente— su bloque iba a convalidar una interpretación de la letra de la Constitución que no fuera el voto de los dos tercios de la totalidad del Cuerpo. Creo que este es un acontecimiento histórico, “penosamente” histórico, diría yo.

No quiero privarme de expresar algunos pensamientos vinculados a la cuestión de fondo, más allá de ratificar plenamente —como si hiciera falta— la posición del bloque del Frente Cívico y Social a favor de la ley, a favor del respeto de la Constitución de la Provincia. Por ello reafirmo, una vez más, que el artículo 104, en su inciso 36, y el artículo 124 de la Carta Magna provincial no ofrecen dudas sobre que se necesitan 47 integrantes de este Cuerpo para poder elegir al Defensor del Pueblo.

Señor presidente, se va a designar a un funcionario que controlará la Administración Pública por los próximos cinco años. Esto merece distintas reflexiones; algunas nos merecen una consideración positiva, por ejemplo revalorizar a esta institución que debe cumplir con tres funciones sumamente trascendentes: la protección de los intereses difusos, el control de la eficacia de los servicios públicos y, por último, observar que se cumpla la ley en la Administración Pública.

En síntesis, nos estamos refiriendo, nada más y nada menos, que a controlar los excesos y los abusos que pudieran darse dentro de la legalidad, porque sabemos que, muchas veces, dentro de la legalidad se escapan algunos resquicios de arbitrariedad.

También debería ser una institución idónea para mejorar y activar los mecanismos de participación popular, contemplados en la Constitución, pero creo que la Defensoría del Pueblo, hasta el momento y desde que fue creada, no ha cumplido con estos propósitos que tuvo el constituyente. Muy lejos de eso, hoy, si le preguntamos a cualquier ciudadano que transite por las calles de nuestra Provincia de Córdoba sobre el Defensor del Pueblo seguramente va a tener dificultades para encontrarle un mérito que no sea el de disponer de 20 o 30 designaciones, y nos dirá que, en rigor, hoy cumple un papel absolutamente formal a través de pronunciamientos a los que muy pocos le prestan atención.

Por otra parte, es poco probable que el nuevo Defensor del Pueblo se disponga a investigar a fondo los excesos de la Administración Central, si es precisamente el Gobierno quien lo designa —en este caso— por una clara decisión política del Gobernador y del bloque del oficialismo.

Mi reflexión es que las cosas, presentadas así, se parecen más a una agencia de colocaciones laborales; se pierden los límites que deben existir entre la representación política y el empleo público.

De todos modos -vale la pena ratificarlo una y cien veces-, seguimos creyendo que esta es una institución que debe representar los intereses populares y, por lo tanto, tenemos la obligación de mejorarla.

Por otra parte, debemos decir que es importante, y en esto coincido —quizás solamente en eso— con el miembro preopinante, que se regularice su situación institucional porque desde hace aproximadamente tres años hay un interinato fuertemente cuestionado, incluso con imputaciones de usurpación de poder que le hacen muy mal a esta institución, al que naturalmente hay que ponerle fin, pero con debate y participación popular.

Otra reflexión tiene que ver con el mecanismo de selección y la modalidad escogida para elegir al Defensor del Pueblo. En tal sentido, tenemos que decir que el oficialismo, en este caso seguramente con el apoyo de un grupo de integrantes de la oposición, suma otro retroceso en la calidad institucional de nuestra querida Provincia de Córdoba.

En ocasión de constituirse, en este ámbito, la Comisión Especial Legislativa para la Reforma Política, recuerdo haber dicho que estábamos en

buen camino, que había sido un avance, en términos institucionales, por devolver a la Legislatura el papel que nunca debió haber dejado de desempeñar. Pero, a partir de ahí todo fue un retroceso, un rosario de desaciertos en términos de deterioro de la calidad institucional y de la satisfacción del ciudadano.

En este sentido, recuerdo delegación de poderes; apartamiento de la mayoría para contraer el empréstito de 500 millones de dólares; sentar en estas bancas a ministros-legisladores -tolerable desde el punto de vista legal pero no en lo ético-, absolutamente “truchos”, para la sanción de las leyes de emergencia; y, días atrás, nos enteramos por los diarios que en la sesión del día siguiente se iba a elegir al Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, cosa que afortunadamente en ese momento se frustró por el desacuerdo de quienes lo proponían. Si hacemos un simple ejercicio de cuantificación, diremos que esta Legislatura camina con “paso de cangrejo”: uno para adelante y diez para atrás.

Nos preguntábamos cuál era la necesidad de esta Legislatura de tratar la designación del Defensor del Pueblo en lo que era —como lo dijo mi amigo, el legislador Asbert— un “escenario de clandestinidad”.

Quiero aclarar que no tengo nada personal contra el candidato que se propone por parte del bloque oficialista -el partido Justicialista- y de la Unión Cívica Radical; es más, no lo conozco, por lo tanto, no sé si cumple con los valores que el miembro informante de la Constituyente provincial del '87 expresaba que debe tener un Defensor del Pueblo: alto grado de consenso y alta probidad moral, a lo que agrego el término “pater famili”, del Derecho Romano. Pero estamos seguros de que su propuesta llegó de la peor manera, destilando un “tufillo” poco grato para la salud institucional de la Provincia.

Señor presidente, creo que estamos perdiendo una excelente oportunidad al no aprovechar un proceso de regularización de un instituto constitucional, abriendo canales de participación y demostrando hábitos transparentes en su designación, cosas que son absolutamente posibles.

Me vienen a la memoria antecedentes de designación de Defensor del Pueblo en nuestra Provincia. En mi ciudad natal, Río Cuarto, existieron Audiencias Públicas; la gente participó activamente; los riocuartenses plantearon qué espera-

ban de un Defensor del Pueblo y cuáles eran los mejores candidatos; la designación se hizo de cara a la gente. Leí, días atrás, que en Carlos Paz también se está intentando hacer un ejercicio similar, algunos hablan de Audiencia Pública, otros de voto popular. En definitiva, y más allá de los mecanismos propuestos que, por supuesto, son materia opinable, la designación se pretende hacer con la sociedad, mirando de frente a la gente y no encerrados entre cuatro paredes.

Este suceso, señor presidente, me trae a la memoria los peores vicios del bipartidismo en este país y en esta Provincia. La crisis del año 2001 trajo, junto al “que se vayan todos”, una serie de consecuencias y derivaciones que no vienen al caso explicitar, pero una de las consecuencias más positivas fue darle un golpe mortal al bipartidismo y permitir que exista un marco más plural en la República Argentina y en Córdoba, brindándole soplos de aire fresco a la democracia que con alternancia se renueva periódicamente. Como ejemplo podríamos mencionar el socialismo de Santa Fe, el ARI de Tierra del Fuego, el Frente Cívico y Social en la Provincia de Córdoba y la centroderecha en la Provincia de Buenos Aires, todas estas expresiones, más allá de mis mayores o menores simpatías, renuevan la democracia.

Este acuerdo político retrotrae la situación a la precrisis del año 2001. Cualquier espectador desprevenido que pase por acá creerá que se trata no de la sesión del día de la fecha sino de una celebrada mucho tiempo atrás. Los cordobeses no quieren ver nunca más esa película. La pregunta que debiéramos hacernos es cómo funcionaría una Defensoría del Pueblo en estas condiciones, cuál va a ser la confianza de la población en una institución que se constituya de esta manera y cuál sería su grado de independencia.

Repito que esta es una oportunidad histórica para que este órgano deliberativo de la Provincia de Córdoba demuestre que las instituciones funcionan correctamente, alejadas de acuerdos políticos que, a los ojos de la gente, aparecen como poco claros y hechos a espaldas de la ciudadanía.

Leyendo el debate que no hace mucho tiempo se realizaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un legislador expresaba: “la pregunta es si ésta va a ser una oportunidad para un de-

bate sobre qué quiere la sociedad que se haga con el organismo o si va a ser el mero reparto de cargos entre los partidos políticos. Sin dudas, los acuerdos parlamentarios fueron elementos decisivos en un régimen democrático; la cuestión es si esos acuerdos son suficientes para definir una institución de esta envergadura o si el pueblo podrá opinar acerca de quiénes deberán defenderlo en los próximos cinco años”.

Sería bueno entonces que la renovación de este cargo fuera acompañada por un debate ciudadano; particularmente creo que en ese debate podríamos poner sobre la mesa un listado de temas, por ejemplo, si están de acuerdo los vecinos con el modo en que funcionó hasta ahora la Defensoría del Pueblo; qué aspectos reforzarían y cuáles modificarían; si queremos un Defensor del Pueblo que solamente recomiende cosas o alguien que juegue un rol mucho más enérgico; si se tiene que parecer al suave Ombudsman de Suecia o se tiene que parecer al recio tribuno de la plebe que tenía Roma; cuál debe ser la relación del Defensor del Pueblo con el poder político de turno; de qué modo preservar su independencia, cómo evaluar la calidad de su gestión; si debe tener legitimación procesal activa; qué modalidades de relación tienen que existir entre el Defensor titular y los Defensores adjuntos y, por supuesto, cómo seleccionar a las personas más idóneas: por elecciones, como se propone a menudo; por concurso público, como se plantea en la ciudad de Neuquén; por acuerdo entre los distintos bloques partidarios de la Legislatura, como se hace en la ciudad de Buenos Aires; en representación del principal partido de la oposición, como ocurre en la ciudad de La Plata, o por algún procedimiento diferente a estos. Lamentablemente, señor presidente, señores legisladores, pueblo de Córdoba, esta discusión va a estar ausente.

Finalmente, podríamos haber hecho uso del ejercicio de la abstención en la propuesta de algún candidato como un repudio a la modalidad de tratamiento que deja en el tintero toda esta discusión. Pero hemos decidido confrontar propuestas desde un costado positivo y marcando nuestras disidencias. Es por eso que hemos tratado de predicar con el ejemplo, para que lo que estamos pretendiendo que sea un Defensor del Pueblo se exteriorice en un nombre que exprese esa prohi-

dad moral y ese alto grado de consenso al que hacía referencia el miembro informante de la Constituyente provincial. Además, pretendemos que ese hombre probo también tenga una indiscutida militancia social y compromiso ciudadano.

Por todo ello, señor presidente, le proponemos al pueblo de la Provincia de Córdoba a un hombre que, a juicio del bloque del Frente Cívico y Social, reúne esos requisitos: me refiero al Padre José Nicolás Alessio, párroco de la iglesia San Cayetano desde hace más de 20 años, enclavada en una populosa barriada de Córdoba, como es el barrio Altamira.

El cura Alessio ha sido y es protagonista, junto a sectores populares cordobeses, de muchas de las luchas sociales de las que esta ciudad ha sido testigo. Por citar sólo algunas, ha sido activo participante de la Unión de Organizaciones de Base en la promoción de leyes que permitieron el debate sobre el destino de los fondos de asistencia social; estuvo junto a los obreros de la Cervecería Córdoba acompañando sus legítimas reivindicaciones y también con los trabajadores de FIAT en la toma fabril, en rechazo a la flexibilización laboral, y junto a los docentes de Córdoba en la militancia por un mejor presupuesto educativo.

Su vocación religiosa lo encuentra haciendo una clara e irrenunciable opción por los desposeídos, contra la explotación social, la falta de oportunidades y la injusticia junto al Grupo de Sacerdotal Enrique Angelelli y, en el orden nacional, en el Grupo de Sacerdotes en la Opción por los Pobres, continuadores del movimiento de curas del Tercer Mundo.

Señor presidente: el cura Alessio dice lo que piensa y nos obliga a pensar. Por todo eso lo proponemos como Defensor del Pueblo para la Provincia de Córdoba.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Asbert.

Sr. Asbert.- Señor presidente: seguramente, a lo largo de esta sesión especial asistiremos a una larga enumeración de las condiciones y obligaciones que el Defensor del Pueblo debe afrontar y enfrentar en el ejercicio de esa función.

Por ello, vamos a omitir esas consideraciones –al menos en esta intervención– para centrarnos en una cuestión que podría calificarse de puro y estricto Derecho. En este sentido, seguramente voy a terminar aburriendo a mis colegas abogados

porque voy a expresar, ni más ni menos, verdades de Perogrullo para quienes tenemos cierto manejo no sólo de los principios del Derecho sino hasta del léxico que se emplea en las normativas jurídicas.

En particular, me voy a referir a la inconstitucionalidad de la pretensión que flota en el ambiente de este recinto de entender que la mayoría necesaria para la designación del Defensor del Pueblo es la emergente de la voluntad de dos tercios de los miembros presentes.

En la universidad, cuando se trata del análisis académico de la interpretación de las normas jurídicas, la sana doctrina unánime, toda la academia, dice que la primera interpretación de una norma debe ser la literal, es decir, ver lo que dice la norma en un marco sistemático, en la teoría general de las normas referidas a ese punto.

Entendemos que nuestra Constitución, en ese sentido, es absolutamente clara. En su artículo 104, inciso 36), habla de designar a dicho funcionario, es decir, al Defensor del Pueblo, con el voto de los dos tercios de sus miembros. Asimismo, cuando luego en el artículo 124 hace mención a la designación, dice que la Legislatura con los dos tercios de sus miembros designa al Defensor del Pueblo.

En la interpretación primera no hay bibliotecas de izquierda y de derecha sino una sola que se refiere a lo que dice la ley en su letra: habla de la totalidad de sus miembros. Un principio elemental jurídico al cual me voy a permitir remitir está en los clásicos del Derecho Romano –que, además, no necesita un ejercicio de traducción sino que el solo texto nos da la claridad suficiente para entender lo que querían–, dice: “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”, es decir, donde la ley no distingue tampoco nosotros debemos hacerlo, y si la ley no distingue que son miembros presentes sino miembros se debe entender que son los miembros. Pero este principio establecido en esta norma merece y puede ser interpretado contrario sensu, es decir, cuando la ley distingue yo debo distinguir, y es el caso que nuestra Constitución distingue.

En el artículo 104 –citado al tratar la designación del Defensor del Pueblo– cuando se refiere a los miembros presentes, como en el inciso 8) de ese articulado, dice: “Autorizar con dos tercios de votos de los miembros presentes”, por lo tanto, cuando quiere decir “miembros presentes” lo dice,

y cuando dice simplemente “miembros” no son los miembros presentes sino la totalidad de los integrantes.

En este argumento, que entiendo absolutamente incontestable, no hay irregularidad, aunque se reconoce y debemos entender que hoy la situación del Defensor del Pueblo no es regular pero se pretende resolverla con una irregularidad inconstitucional, con una aberración jurídica. Eso realmente nos parece un despropósito total, es como tratar de tapar el sol con una mano.

En definitiva, señor presidente, este bloque de la Concertación Plural anticipa que, a su criterio, la cantidad de votos que debe reunir la elección de la Defensoría del Pueblo debe ser la que corresponde a los “dos tercios de la totalidad de los miembros de esta Legislatura”.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.

Sr. Maiocco.- Señor presidente: comparto plenamente lo manifestado por los legisladores Birri y Asbert, y muchas de las posiciones del legislador Ruiz, que, como hombres de Derecho, seguramente tienen una apreciación muy exacta de este tema.

Pero necesitamos hacer algunos análisis más. Primero, señor presidente, solicito que por Secretaría -porque, como hemos dicho en otras ocasiones, este tablero no funciona bien- se me informe cuántos legisladores componen este Cuerpo y cuántos legisladores están presentes en esta sesión.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se le brindará esa información, señor legislador.

Sr. Secretario (Daniele).- El Cuerpo está compuesto por 70 legisladores y al inicio de la sesión había 66 legisladores presentes. Los ausentes son: las legisladoras Matar, Poncio y Fernández, y el legislador Serna.

Sr. Maiocco.- Muchas gracias, señor presidente.

Formulé esta pregunta para que no quede ninguna duda de algunas de las cosas que voy a plantear a continuación.

Tengo en mi poder el Diario de Sesiones de la Convención Provincial Constituyente del año 1987, según el cual los constituyentes –

recordemos que en ese entonces existían las dos Cámaras- decían: “Artículo 123. La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros reunidos en Asamblea designa al Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia de la prestación de los servicios públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo que determine la ley”. Hablaba de los dos tercios de la “Asamblea” porque estaba compuesta por las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Señor presidente, escuché con estupor lo que expresó el legislador Miguel Nicolás, cuando dijo que “a la Constitución hay que interpretarla de acuerdo a este momento y que había que solucionar una irregularidad”, porque tengo en mi poder la nómina de quienes integraban la Asamblea del 22 de junio del año 2000, presidida por el señor Presidente Provisorio, senador doctor Carlos Alberto Presas, y la lista de los senadores presentes y ausentes, de los diputados presentes y ausentes, con aviso y sin aviso. En esa sesión del año 2000 se planteó una diferencia porque había diputados y senadores que no estaban de acuerdo con postular al doctor Nelson Filippi, por lo que algunos de ellos decidieron no entrar a la sesión. Fíjese qué casualidad –creo que es difícil decir hoy que la Constitución se interpreta de una manera distinta–: entre los senadores ausentes figuraba Miguel Osvaldo Nicolás y entre los diputados ausentes sin aviso Mario Alberto Decara, porque no estaban de acuerdo con la irregularidad con que se designaba al Defensor del Pueblo de la Provincia. Hoy se olvidaron de eso y van a designarlo de manera irregular.

En línea con lo que leí del artículo 123 y reafirmando lo expresado por el legislador Asbert, el artículo 124 de la Constitución –por más que sea redundante, quiero leerlo–, a partir de esta Legislatura Unicameral, compuesta por 70 legisladores, expresa: “La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros designa al Defensor del Pueblo, como comisionado...”; se refiere a “dos tercios de sus miembros”, por eso pregunté cuántos miembros tiene esta Cámara y el secretario, gentilmente, me informó que 70. Por su parte, el inciso 8) del artículo 104 –tal como lo manifestara el legislador Asbert– expresa: “Autorizar con dos

tercios de votos de los miembros presentes el abandono de jurisdicción...”; o sea, se aclara expresamente, por un lado, “dos tercios de sus miembros” y, por el otro, “dos tercios de los votos de los miembros presentes”.

Todo lo que digamos a partir de aquí, señor presidente, será ni más ni menos que buscar la vuelta para convalidar una mentira. Hay algo más grave aún –lo anticiparon hoy en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria–: cuando pongamos esto a discusión, van a decir: “¿qué opinan, muchachos?, ¿es blanco o negro?”, y lo van a votar por mayoría simple; van a decir: “la mayoría entendió que el artículo expresa que son los dos tercios de los presentes”, de manera tal que por mayoría simple van a interpretar un artículo de la Constitución, con lo cual están desvirtuándola absolutamente, ya que pide “mayorías agravadas”. Y resulta que después hablan de transparencia y de calidad institucional. Nos juntamos todos los lunes para ver cómo vamos a hacer la reforma y, mientras tanto, estamos violando la Constitución de cabo a rabo.

Que en el pasado se haya violado la Constitución no es justificativo para volver a hacerlo; no pueden obligarnos a quienes hoy estamos presentes, a quienes hoy integramos este Cuerpo, a que la violemos. En realidad, digo “violar” la Constitución por una cuestión de respeto a este recinto, ya que la verdadera palabra que define lo que van a hacerle empieza con “c”.

No aprobar al Defensor del Pueblo con 47 votos es lisa y llanamente una trampa; hace una semana el Frente Cívico trajo un cartel que decía “fraude nunca más”, y hoy me permití traer otro, que coloqué en mi banca, que dice: “otra vez fraude”. (Aplausos).

El problema no es la persona de Decara, el problema es que lo van a aprobar de caraduras; porque ustedes tienen muchos abogados en sus filas, algunos de los cuales son, además, profesores de Derecho Constitucional de las dos universidades más importantes de la Provincia. Quiero pensar que a partir de ahora cuando un alumno no sepa un artículo de la Constitución no lo van a bochar, le van a decir: “querido, no tiene importancia que no sepas un artículo de la Constitución, si total nosotros, que supuestamente la sabemos y la enseñamos, no la defendemos”.

Hoy, señor presidente, para ustedes, para parte del radicalismo y para algunos bloques que

van a acompañar esta designación la Constitución es “letra muerta”. Hace poco tiempo aprobaron un empréstito por 500 millones de dólares con argumentos inexistentes; por suerte nadie se los quiere prestar porque si no estaríamos endeudados en 500 millones de dólares más. Repito: hoy por mayoría simple, van a violar el artículo 124 de la Constitución.

Me alegró mucho escuchar al legislador Birri decir que había escuchado al legislador Faustini, porque todos los que estábamos en la Comisión de Labor Parlamentaria escuchamos al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical cuando dijo: “yo no borro con el codo lo que escribí con la mano”, y expresó claramente: “vamos a aprobarlo si tenemos los 47 votos”.

Señor presidente: hoy no van a aprobarlo con 47 votos. ¿Qué pasó? ¿Va a borrarlo con el codo? ¿Trajo liquid paper? ¿Cuál es la diferencia? Todos escuchamos que lo iban a aprobar si tenían los 47 votos.

Sinceramente les digo, muchachos, que no entiendo, con los problemas que tiene la Provincia, que se está incendiando, por qué no se busca el consenso de todas las fuerzas políticas, morigerando las críticas de la oposición. En lugar de tratar de salvar la Provincia, con una cosa como ésta estamos tirándola por un precipicio y quemando las naves.

Esto nos hace pensar que en el tema del Defensor del Pueblo el “negocio o negociado” - como lo quieran llamar- es muy grande, porque sino no hay explicación para la violación de la Constitución que están por cometer.

Nos queda plantear un recurso a la Justicia, probablemente de nulidad absoluta, porque lo que están por hacer hoy es, justamente, violar la Constitución.

Por último, señor presidente, quiero hacer un reconocimiento y dar mis respetos a la doctora Jessica Valentini, quien ha desempeñado su cargo de Defensora del Pueblo con idoneidad durante el tiempo que le tocó ejercerlo.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente, desde el ARI-Coalición Cívica, queremos expresar nuestra posición muy clara sobre este tema. Creemos, en definitiva, que en este momento se está debatiendo sobre si el Defensor del Pueblo es una “institución

republicana” o se trata de un mero “conchavo partidario y político”.

Sí, señor presidente, cuando uno escucha argumentos y analiza cómo se ha venido tratando el tema durante este mes en la Legislatura, llega a la conclusión de que a los que van a votar a favor de esta postulación -no tanto de la postulación sino del procedimiento con el cual se está llevando adelante- no les interesa absolutamente nada la institución del Defensor del Pueblo, sino que lo único que les interesa es el mero cálculo político de una variable de ajuste interna de un partido o mostrar como un triunfo la división de la oposición.

Lamento que una parte de los legisladores del radicalismo, partido que tiene una tradición histórica de defender la calidad institucional y las instituciones republicanas, se esté prestando a esta situación. Escuchaba al legislador Nicolás reseñar las virtudes de la institución del Defensor del Pueblo, pero han pasado veintiún años desde que esta institución fue creada y no se ha hecho nada para modificarla.

Desde nuestro bloque consideramos que no hay condiciones políticas; el legislador habló de consenso, pero no hay consenso político en esta Provincia porque ni siquiera el partido de oposición con el que están consensuando lo ha hecho como partido ni en conjunto. No hay legalidad porque -como muy bien lo ha explicado el legislador Asbert- se está pisoteando la Constitución de la Provincia en el marco de una reforma política. ¿Para dónde estamos mirando, señor presidente? No hay legitimidad social porque no hubo un proceso ni un procedimiento transparente, claro y participativo para designar al Defensor del Pueblo.

Señor presidente, a veces en política no se trata de vencer sino de convencer. Espero -como decía muy bien el legislador Maiocco- que los abogados que están por votar interpreten esta Constitución para ver si de alguna manera les surgen algunas dudas; ha sido muy claro el legislador Asbert con su interpretación y seguramente otros legisladores del Frente Cívico expondrán en el mismo sentido.

Para nosotros esta institución es una oportunidad para dar el primer paso de la reforma política. La elección del 2 de setiembre ya cumplió un año y todavía esta Legislatura no ha votado ningún proyecto de reforma política. Estamos avan-

zando con algunos consensos, pero no echemos a perder ese entusiasmo que de a poco nos puede ir ganando para hacer una reforma política cuando la propia comisión de la reforma ha dictaminado, entre otras cosas, en la página 143 del informe: “Acordar legitimación procesal activa al Defensor del Pueblo. La Comisión Consultiva de Expertos, por mayoría de sus miembros, recomienda la reforma de la Constitución provincial en el artículo 124 a los fines de atribuirle al Defensor del Pueblo legitimación procesal activa para demandar”.

¿Que quiere decir esto, señor presidente? Que el Defensor deje de ser un simple gestor de buenos oficios, una persona que con buena intención le toque la puerta a algún funcionario y le diga “te estás portando mal”, pero que no tenga una herramienta jurídica para llevar a ese funcionario a la Justicia o para modificar el acto administrativo que puede estar causándole un perjuicio a un vecino.

De eso se trata, son dos palabras que van juntas: defensoría y legitimación para ir a la Justicia, de lo contrario no se entiende un Defensor sin la posibilidad de ir a la Justicia, y esta Legislatura, en lugar de discutir primero las reformas que hay que hacerle a esta institución, pone “el carro delante del caballo” y quiere hacer una nueva designación.

Pregunto: ¿cuándo esta Legislatura va a debatir estas cuestiones? ¿Por qué no hacemos al revés? Decía que hace 21 años que fue creada esta institución y en el medio, en el año '94, la reforma de la Constitución nacional le dio legitimación activa al Defensor del Pueblo de la Nación, y hoy vemos que ese Defensor tiene más competencias y de alguna manera llega un poco más allá del simple gestor de buenos oficios.

Señor presidente, tenemos procesos como el de la ciudad de Villa Carlos Paz que definió en su Carta Orgánica votar popularmente al Defensor del Pueblo. Este es un tema opinable pero, sin duda, en estos veintiún años ha habido muchos avances, y esta Legislatura no puede detenerse únicamente a designar un Defensor del Pueblo sin antes revisar la institución.

La ciudad de Buenos Aires tiene un mecanismo muy interesante, cualquier vecino o cualquier organización no gubernamental puede proponer o postular a personas con reconocida tra-

yectoria para que luego la Legislatura convierta a esa persona en candidato. Una vez que sucede esto, se somete a una Audiencia Pública donde cualquier vecino de la ciudad puede hacer objeciones y formularle preguntas al futuro Defensor del Pueblo.

Qué bueno sería para la calidad institucional que no estuviéramos debatiendo nombres de personas o trayectorias partidarias sino modelos de gestión para la Defensoría del Pueblo; por ejemplo, si un Defensor del Pueblo va a estar cinco años ejerciendo sus funciones, cuál va a ser su tema prioritario de preocupación y qué herramientas va a reclamar para poder cumplir su cometido.

En una nota extensa recientemente publicada en La Voz del Interior, el doctor Jorge Eduardo Gentile señala: "Sería importante que antes de designar al nuevo Defensor del Pueblo provincial la Legislatura fije con alcance amplio su legitimación judicial. Proponemos que al reformar la ley se le reconozca al Defensor Provincial la facultad de denunciar, accionar, querellar, que pueda plantear excepciones, recursos, inconstitucionalidades ante los tribunales de justicia provinciales y federales, sin perjuicio de las facultades que ya tiene reconocidas para actuar ante la Administración Pública, recibir denuncias, inspeccionar, investigar, incluso con el auxilio de peritos y de la fuerza pública, informar, aconsejar, sugerir, recordar, exhortar, recomendar, dictaminar, mediar, proponer mediaciones en conflictos, presentar anteproyectos de normas, reclamar, recurrir o denunciar ante organismos administrativos".

¡Fíjese la lista de cosas que podría hacer el Defensor del Pueblo si esta Legislatura le otorgara facultades para convertirlo en un organismo útil! La mayoría de la gente considera que la Defensoría del Pueblo es un organismo ineficaz, más allá de algunas importantes actuaciones que pueda haber tenido la Defensora adjunta, como señalaba Maiocco. Todos compartimos la irregularidad que hubo en la falta de designación por tres años, salvo que el oficialismo quiera tener una persona que haga poco, que no moleste, no sea cuestión que aparezca otro Luis Juez. Pero no se trata de eso, señor presidente, sino de definir el perfil de una institución y de acomodar el nombre de la persona al perfil de la institución y no al revés.

El bloque de la mayoría, en febrero del 2007, convocó a una Audiencia Pública para designar a los fiscales adjuntos, por qué no hizo lo

mismo durante este mes para saber qué opina la gente de Decara, de Alessio, o cualquier otro candidato que pudiera presentarse.

Fíjese si es importante el tema de las competencias que la actual Defensora fue a la Justicia con un amparo para defender a Córdoba frente a la Nación y ese amparo le fue rechazado porque la Justicia interpreta que no tiene competencia, más allá que con la reforma del '94 muchos entendemos que hoy los defensores la tienen. Hace falta que esta Legislatura sea muy clara en este tema.

Señor presidente: con la sesión de hoy retrocedemos. Esta figura está avanzando en muchas ciudades del país. En definitiva, creo que la marca de origen de esta designación va a determinar la gestión que en el futuro va a tener el Defensor del Pueblo. Si lo hacemos con un procedimiento transparente, participativo, por el que la gente venga, opine, lo interroge sobre qué quiere hacer desde la Defensoría, creo que podemos tener una buena Defensoría del Pueblo, si no va a ser un organismo mediocre más, y no sólo por la persona sino fundamentalmente porque no se le están dando las competencias y las facultades que necesita.

Nosotros formamos parte de un partido político, como todos los que integramos la Legislatura, y nadie reniega de un acuerdo partidario para designar un Defensor, pero tiene que estar balanceado con la legitimidad social, con el proceso y los procedimientos transparentes de designación; tenemos que encontrar un equilibrio en eso, porque si no la política partidaria cada vez se aleja más de la gente. Si la política partidaria no hace que los acuerdos que se hacen sean sometidos al control ciudadano a través de Audiencias Públicas o de otros mecanismos, la política se aleja cada vez más de la gente.

Creo que en este tema hay más vocación de poder que de servicio; está más presente la búsqueda de un espacio de poder que de representación del pueblo de la Provincia para defenderlo en sus derechos.

Muchas veces hemos dicho en las sesiones que tal proyecto no tiene legitimidad, pero aceptamos que tiene legalidad. En este caso, señor presidente, no hay legalidad ni legitimidad.

No voy a explicar la posición jurídica ya que me voy a remitir a lo expuesto por los doctores Asbert y Maiocco, que muy bien lo han hecho. Sí

voy a ratificar que se trata de una designación inconstitucional o nula si no reúne los 47 votos necesarios.

Como dijera Aristóteles hace más de 2000 años: “Es más difícil enderezar una Constitución que hacer una nueva”. Empecemos por enderezar esta Constitución en vez de pisotearla.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: luego de haber escuchado atentamente las palabras de quienes me precedieron en el uso de la palabra, quiero hacer algunas reflexiones, no como abogada –puesto que no lo soy- ni como experta política, ya que soy quizás de las más nuevas en estas lides, pero sí desde el sentido común que me ha dado la vida, mi actividad profesional y empresaria.

Comienzo recordando que el artículo 124 de la Constitución Provincial dice: “La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros”. El legislador Maiocco preguntó cuántos eran los miembros de esta Legislatura, y se le respondió que 70. He escuchado una serie de disquisiciones jurídicas, pero el sentido común me dice que si los miembros de la Legislatura son 70, los dos tercios deben representar a esos 70 miembros. Ese es mi primer razonamiento lógico.

El otro razonamiento lógico que quiero hacer es que si algo debe interpretarse, reinterpretarse y leerse nuevamente para volver a interpretarlo es porque no está claro o no se logran los consensos suficientes como para poder interpretarlo, valga la redundancia. Digamos que es como un parto con fórceps, y la época de los fórceps ha quedado atrás hace tiempo. En consecuencia, estamos diciendo que los votos supuestos no llegan a los 47 que exige la Constitución de la Provincia.

Otra reflexión que quiero hacer es que, por esas coincidencias jurídicas o legales, el Capítulo V de la Constitución que habla del Defensor del Pueblo, también habla del Consejo Económico y Social. Entonces, si bien puedo parecer redundante y quizás estén hastiados del tema, quiero resaltar que hemos hablado de la violación y del no cumplimiento de la Constitución, y nos topamos que el mismo Capítulo comprende a otras dos instituciones que hace tres años que no se respetan.

Desde el mes de febrero de este año hemos presentado pedidos de informes para que nos aclaren por qué no funciona el Consejo Económico y Social y el Consejo de Partidos Políticos, pero no obtenemos respuestas.

En consecuencia, hace tres años que no tenemos Defensor de Pueblo, hace tres años que no sesiona el Consejo Económico y Social y hace tres años que no funciona el Consejo de Partidos Políticos. Entonces, ¿podemos hablar de respeto a la Constitución? ¿Podemos pretender elegir a un representante como Defensor del Pueblo para que defienda los derechos difusos si los derechos concretos que establece nuestra Constitución no son debidamente respetados?

Otra reflexión que queremos realizar es por qué después de tres años de este impasse tenemos apresuramiento por resolver este tema, con ausencias casuales o no, con interpretaciones y reinterpretaciones. ¿Ayudamos a la democracia y a nuestras instituciones?, ¿ayudamos al pueblo al que este Defensor debe proteger?

Si se necesitan los dos tercios de esta Legislatura para designar al Defensor del Pueblo, quiere decir que hacen falta los consensos, puesto que ningún bloque lograría los votos positivos necesarios por sí mismo. ¿Hemos trabajado para lograr ese consenso? Han pasado 21 días desde el intento fallido de la reunión anterior y, que yo sepa, no hubo mucho trabajo para lograr el consenso.

Pero, el mayor asombro lo produce el bloque que propone el candidato para ocupar ese cargo, que sigue con la misma proporción entre votos positivos y negativos, lo cual nos habla de una interna partidaria que debemos dirimir quienes somos dueños de un “sí” o de un “no”. Es decir, lo que el bloque no puede resolver debe ser resuelto con los votos positivos o negativos de otros bloques, cuando debería ser resuelto por consenso.

Por último, como bien dijo alguien, estamos trabajando para reformar la Constitución; el bloque del Vecinalismo Independiente ha presentado, en el mes de febrero, una propuesta de reforma política constitucional que ya fue mencionada al tratar este tema en una anterior ocasión. Proponemos que sea elegido por el voto directo del pueblo, que tenga autarquía y autonomía funcional, y terminado su mandato no pueda presentarse a cargos

electivos provinciales por cinco años. Esto tiene como objetivo evitar que se use este cargo como un “trampolín” para futuros cargos electivos, que quien ejerza el cargo de Defensor del Pueblo lo haga con verdadera “vocación de servicio”.

Quizás sea utópico hablar de vocación de servicio -últimamente los argentinos no estamos dando muestras de que nos mueva el objetivo de servicio a la comunidad- pero si no la recuperamos nunca vamos a salir de la situación de caos y conflicto.

Nuestro bloque también ha presentado, hace 21 días, un proyecto de ley por el que solicita se le otorgue al Defensor del Pueblo autonomía y autarquía. Hasta este momento, ese proyecto no ha sido tratado, sabiendo que estamos a las puertas de tocar nuevamente el tema de la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

He realizado estas reflexiones con profunda tristeza, porque es nuestro deseo que nuestra democracia sea fuerte, que nuestras instituciones sean respetadas, que el Defensor del Pueblo cumpla con la función para la que va a ser elegido. Mal puede alguien defender el respeto a la ley cuando sus cimientos o fundamentos no están sólidamente contruidos sobre las leyes que marcan el camino que debemos seguir.

Quizás no sea éste el momento oportuno para la elección del Defensor del Pueblo, quizás haga falta más concientización de los legisladores que están ausentes y de los que estamos presentes, más consenso, más diálogo y más debate.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente: por suerte, no soy abogada y, en consecuencia, no haré una interpretación legal del tema; voy a adherir a quien me merece muchísimo respeto, a quien he escuchado atentamente -les pido que dejen de decir: “uh”-, me refiero al legislador Asbert, quien ha brindado una excelente explicación desde el punto de vista técnico.

Me voy a remitir al sentido común y a lo que aprendí en la escuela cuando me enseñaron a leer y a interpretar sólo lo que está escrito. El artículo 124 dice que la Legislatura designa al Defensor del Pueblo con el voto de los “dos tercios de sus miembros”. Más claro hay que echarle agua.

Entonces, el bloque de Izquierda Socialista no va a ser cómplice, señor presidente, del bloque de la mayoría, ni del bloque de la U.C.R. que han hecho el esfuerzo de meter con fórceps -como decía la doctora que me precedió en el uso de la palabra- un “acuerdo espurio”, un acuerdo del que el pueblo debería estar por lo menos enterado, pero el pueblo está ausente.

En primer lugar no vamos acompañar ninguna votación simple derivada de la interpretación del artículo 124; son “47 votos” los que necesita esta Cámara para poder designar al Defensor del Pueblo.

En segundo lugar, entendemos que si un pueblo necesita de un Defensor, de un Fiscal Anticorrupción, de una Casa del Ciudadano, de un ERSEP, si un pueblo necesita de estos institutos, es porque hay “abuso en la administración”, en el Gobierno; es porque estamos “fritos”.

Entiendo que los defensores del pueblo, de los intereses ciudadanos, tienen que ser, en primer lugar, los gobernantes y, en segundo lugar, los representantes del pueblo que, por su voto soberano, tienen la posibilidad de representarlo en el Poder Legislativo.

Reconocemos la necesidad objetiva y concreta de que existan estas instituciones; entonces, proponemos que la “necesaria reforma política”, señor presidente, empiece incorporando la elección del Defensor del Pueblo por el “voto directo”, para que sea el pueblo el que participe no solamente en la definición de “quién” sino también de “para qué”; con qué objetivo, con qué facultades, con qué sueldo, cuándo debe ser revocable, si tiene que durar 5 años o no. Creo que es la reforma política la que va a permitir transparentar estos institutos, para que dejen de ser “negociados y acuerdos espurios”. Escuché hoy que se trata de una valiosa institución, y efectivamente lo es, señor presidente, pero por el “valor económico”, no por la calidad institucional de la Defensoría del Pueblo.

¿De qué consenso hablan quienes quieren convencernos de que las nominaciones son producto y resultado de un debate profundo y sincero? ¡Mentiras!, ¿qué consenso hubo si hace un mes que vienen contando porotos? ¿De qué Defensor del Pueblo están hablando cuando tenemos la Provincia en crisis? ¿Cuándo un Defensor del Pueblo supervisó la calidad de los servicios públicos: agua, luz, transporte?, nunca, señor presiden-

te. ¿Acaso el Defensor del Pueblo pudo frenar, conjuntamente con la lucha popular, la entrega del agua hasta el año 2027? Es un asesor “terapéutico-político” caro, que no le sirve a la gente, que es a quien tiene que servir, para lo cual requiere de otras facultades, como la de investigar, contando con legitimidad procesal; de lo contrario, no sirve.

Salgan a las calles y pregúntenle a la gente, al pueblo, qué opina del Defensor, y verán que en muchos casos ni saben para qué sirve; por eso, muchas veces vienen a nuestros despachos a preguntarnos al respecto, y los mandamos para que los asesoren legalmente, gratis porque se trata de gente que no tiene recursos. No queremos este tipo de “ilusiones democráticas” sino “instituciones democráticas”, que es distinto. Entonces, en el caso de que el Defensor del Pueblo resulte necesario, tiene que ser “elegido y revocado por el pueblo”, que con su participación debe determinar “para qué” debe ser creado este instituto y al servicio “de qué” intereses.

Si hay algo que hoy queda claro –al menos a mí– es que no sólo pretenden descalificar aún más este tipo de “ilusiones democráticas” sino que, además, van a “bastardear” –seguramente por mayoría simple y no con los dos tercios– la Constitución, violando el artículo que plantea claramente la necesidad de contar con 47 votos.

Reafirmo lo que algunos legisladores ya expresaron, ya que también escuché al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, legislador Faustinelli, decir que iban a respetar la única lectura que hay que hacer de la Constitución provincial, que iban a “respetar que el Defensor del Pueblo surgiese del consenso de los 47 votos”, que iban a hacer lo posible por lograr la unidad dentro de su bloque. Por eso, creo que hay que llamar a la reflexión al presidente de la Unión Cívica Radical y decirle que tome “Memorex”, que no se puede olvidar de lo que nos dijo hace tres semanas con el pretexto de postergar la sesión especial; porque en aquella oportunidad íbamos a decir que fue entre gallos y medianoche. Hoy esa frase no la podemos utilizar, lo que sí decimos es que se hace utilizando el fraude, utilizando la trampa y la mentira, mientras que el pueblo, como de costumbre, sigue ignorando, desconociendo, no comprometiéndose absolutamente para nada con este tipo de debates porque sigue estando ausente.

Nosotros no vamos a hacer juicio de valor sobre las personas que han sido propuestas, no vamos a hacer un juicio de la calidad humana que puedan tener estas personas, porque, en verdad, al señor Decara no lo conozco, aunque sí conozco al Padre Alessio porque hemos participado juntos en muchas luchas, pero creo que en esta instancia apoyar cualquier propuesta en esta Legislatura sería borrar con el codo lo que escribimos con la mano y pensamos con la cabeza: el Defensor del Pueblo tiene que salir del pueblo y no de esta sesión trucha.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).– Tiene la palabra el señor legislador Brügge.

Sr. Brügge.– Señor presidente: mi intervención busca determinar una cuestión que ha sido puesta a consideración por el legislador Miguel Nicolás, con referencia a cuál es la mayoría requerida para la designación del Defensor del Pueblo en la Provincia de Córdoba, en función de lo que establece el artículo 124 de la Constitución Provincial.

Para ello, señor presidente, hay que hacer consideraciones previas y un análisis sistemático del texto de la Constitución Provincial.

Escuché atentamente las distintas interpretaciones y razonamientos efectuados por los legisladores preopinantes; todos son muy respetables pero, humildemente, no los comparto. En ese aspecto, debo señalar que lo primero que tenemos que analizar es la naturaleza institucional de la figura que estamos tratando de normalizar, porque si hay un consenso claro y evidente en esta Legislatura es que se necesita normalizar la institución del Defensor del Pueblo, que ya lleva una mora de tres años en su designación. A raíz de esa aclaración es que debemos señalar que la naturaleza institucional del Defensor del Pueblo es la de ser un comisionado de esta Legislatura; de hecho, si analizamos cuál es la ubicación que tiene el artículo 124 dentro del texto de nuestra Constitución, vemos que está dentro de lo que es el Poder Legislativo. Así es en todo el Derecho Comparado y en todo el Derecho Público provincial: es un comisionado legislativo.

La reforma de la Constitución del año 1987 hizo un gran avance en esta materia ya que incluyó esta institución. Lamentablemente, la ley que

reglamentó las atribuciones de esta figura no le dio el alcance que entendemos debe tener, sobre todo en lo que bien se ha señalado aquí: la legitimación activa. Algo que no mencionaron los legisladores preopinantes y que no tiene el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba son las facultades investigativas; soy partidario de que las tenga y trabajo seriamente para que en esta Legislatura podamos modificar la ley al respecto.

Siguiendo el análisis, vemos que el artículo 124, que ha sido mencionado reiteradamente por los legisladores preopinantes y efectuada su lectura, establece que para la designación del Defensor del Pueblo se requiere de los votos de los dos tercios de los miembros de la Legislatura. Este artículo es una repetición de lo que viene del '87 con una pequeña diferencia en cuanto a que aquel texto hablaba de las Cámaras y hoy se habla de la Legislatura. De ahí que tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿los dos tercios requeridos son de los miembros presentes o de la totalidad de los miembros?

Para responder a este interrogante partimos de una primera premisa: literalmente el artículo 124 en ningún lado habla de la totalidad de los miembros, de su simple lectura surge que no está incluida la frase "totalidad de los miembros". Este es el primer punto que podemos señalar, y no es menor porque entendemos que el constituyente cuando quiso "expresar" en el texto constitucional una mayoría agravada -que es de las más calificadas que se puede exigir en un órgano parlamentario anterior a la unanimidad: la mayoría de los dos tercios de la totalidad de los miembros- expresamente lo señaló para actos legislativos o para actuaciones del Poder Legislativo de gran trascendencia institucional.

De esta forma, nuestra Constitución habla de dos tercios de la totalidad de sus miembros en los siguientes casos: para destituir a los que son pasibles de juicio político, el artículo 121 de la Constitución provincial señala que se exige los dos tercios de la totalidad de los miembros que integran la Sala Juzgadora de juicio político; se exige también dos tercios para otro hecho trascendental en la vida institucional de una provincia como es poner en funcionamiento o activar el poder constituyente derivado, es decir, declarar la necesidad de la reforma constitucional; en el artículo 196 de nuestra Constitución provincial se exige para declarar la reforma los dos tercios de la tota-

lidad de los miembros. También se exige en otro hecho de igual trascendencia institucional, nada más ni nada menos que avanzar sobre la autonomía municipal, principio férreamente protegido por nuestra Constitución provincial, me estoy refiriendo a la declaración de intervención de un municipio, artículo 104, inciso 12) de la Constitución provincial, que exige dos tercios de la totalidad de sus miembros.

Quiero detenerme en este supuesto de la intervención a los municipios porque aquí puede salir a luz el criterio legislativo a tener en cuenta con referencia a lo que estamos analizando. Digo esto porque antes de la reforma de la Constitución provincial del año 2001, el anterior artículo 110, inciso 8) de la Constitución, cuando mencionaba este supuesto de la intervención de los municipios, establecía que la intervención se disponía con los dos tercios de los votos de cada Cámara. El constituyente, en la reforma del año 2001, por entender que de la lectura del texto no se interpretaba que estábamos en presencia de dos tercios de la totalidad de sus miembros, incluyó el término "totalidad" en el nuevo inciso que hoy corresponde al artículo 104, inciso 12) y quedó establecido que para intervenir un municipio hoy se requieren los dos tercios de la totalidad de sus miembros. ¿Por qué hizo ello el constituyente modificando esta parte concreta de la Constitución? Porque de la literalidad del anterior artículo 110, inciso 8), no surgía que fuese necesaria la totalidad para poder intervenir un municipio y como era un hecho grave y trascendental -como recién señalé- se requería esa mayoría más exigente antes de llegar a la unanimidad en un Cuerpo legislativo.

En ese sentido, no puedo dejar de señalar que la interpretación que debemos hacer del texto de la Constitución tiene que ser armónica, sin dejar de lado estos artículos, ni el criterio del constituyente ni la naturaleza jurídica del Defensor del Pueblo, que es -repito- un comisionado legislativo. ¿Por qué insisto en este punto, señor presidente? Porque nuestra Constitución Provincial para designar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y a los jueces inferiores que integran el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba no exige la mayoría pretendida por los legisladores preopinantes de dos tercios de la totalidad de los miembros. Si para integrar un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que tiene la tarea fundamental de garantizar el ejercicio de los derechos

de los ciudadanos, no se exige esa mayoría calificada de los dos tercios de los miembros, cómo podemos entender, señor presidente, que para un comisionado parlamentario se exija dos tercios de la totalidad de los miembros. En ese sentido, señor presidente, debo señalar que estamos colocando a la figura del Defensor del Pueblo, que es un órgano de los llamados “extra poderes”, por encima de las exigencias que establecemos para uno de los poderes esenciales y relevantes como es el Poder Judicial.

No existe en el texto constitucional de la Provincia de Córdoba ninguna normativa que exija que funcionario alguno, denominado expresamente en el texto de nuestra Constitución, tenga una mayoría calificada de dos tercios de la totalidad de los miembros de esta Legislatura para su designación. Si esto es así, ¿por qué tenemos que llegar a la conclusión que debe exigirse para el Defensor del Pueblo?, cuando –repito- de la literalidad del artículo 124 no surge el término “totalidad” de los miembros de la Legislatura, como sí ocurre para los otros supuestos. No es menor el precedente parlamentario, señor presidente; se lo ha querido disminuir. Se ha querido contener en un aspecto, con un criterio más bien pequeño –o interpretación pequeña-, el precedente parlamentario de la Asamblea Legislativa llevada adelante el 22 de junio del año 2000, con el cual se procedió a la designación del anterior Defensor del Pueblo.

Decimos que no es menor porque el precedente parlamentario sirve como un antecedente para entender cuál fue el criterio legislativo utilizado para determinar cuál era la mayoría necesaria para la designación del Defensor del Pueblo. En esa oportunidad, por ejemplo, el diputado Prudencio Bustos Argañaraz señaló: “Cuando la Constitución no establece diferenciación o distinción, debe interpretarse con sentido estricto; y cuando la Constitución ha querido referirse a la totalidad de los miembros, lo ha dicho expresamente”.

En igual sentido, el diputado Correa señaló: “El diputado Gastiazoro y quien les habla coinciden, en general, con las argumentaciones vertidas por el diputado Argañaraz, en el sentido que interpretaba, respecto al artículo 110, inciso 34), y al artículo 124 de la Constitución provincial, que son suficientes los dos tercios de los miembros presentes para la designación”. Así, podemos citar

también al senador Obregón Cano y al diputado Sticca, que se pronunciaron en igual sentido.

Señor presidente, no debemos olvidarnos de que estamos discutiendo el tema de los dos tercios de los miembros presentes porque faltan legisladores; y esos legisladores sabían que hoy se iba a tratar, en sesión especial, la designación del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, si estuviesen presentes esos legisladores, quizás no se hubiese planteado la discusión sobre si son necesarios los dos tercios de la totalidad de los legisladores o de los legisladores presentes, ya que en dicha circunstancia estarían coincidiendo los presentes con la totalidad.

Los legisladores presentes tenemos la voluntad política de normalizar la institución desde el punto de vista jurídico y constitucional. Además, debo señalar que la norma constitucional no impone ningún reparo para arribar a la conclusión de que los votos favorables para la designación del Defensor del Pueblo son sobre la base de los dos tercios de los miembros “presentes”, que no es una mayoría simple, como dijo algún legislador preopinante; es también, una mayoría calificada, porque la mayoría calificada son los “dos tercios”, que pueden ser de los “presentes” o de la “totalidad”. En este caso, estamos en presencia de una mayoría calificada y no de una mayoría simple.

Finalmente, quiero señalar que la normalización institucional de la figura del Defensor del Pueblo, que es una asignatura pendiente, no quita ni desmerece la función que ha venido desempeñando la Defensora Adjunta que ha estado a cargo, no tengo ningún tipo de cuestionamiento sobre su persona ni sobre su actuación funcional.

Deseo que quede absolutamente claro, señor presidente, que de mi parte y de la del bloque al que pertenezco existe la firme y decidida voluntad de avanzar en modernizar esta institución. Por lo tanto, estamos seguros de que en poco tiempo revisaremos las facultades que tiene esta figura para colocarla al mismo nivel de los demás Defensores del Pueblo de las otras provincias y de la Nación.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: pensaba hablar más tarde, pero el inteligente plan-

teo del doctor Brügge hace que adelante mi exposición para no dejar la sensación de que estamos equivocados.

Comenzaré con una autocrítica, porque se dijo, como al pasar, que los legisladores ausentes de la oposición sabían que se iba a designar al Defensor del Pueblo y no vinieron. Esta decisión se iba a tomar hace 21 días y en ese momento estaban todos los legisladores. Como el oficialismo no tenía los 47 miembros, accedió a postergar por 21 días y ahora parece que faltan cuatro legisladores, precisamente de la oposición.

Este argumento me hace recordar una anécdota futbolera, cuando se pateaba un tiro libre y se forma una barrera. El que va a patear el tiro libre siempre mira, cabecea para ver dónde aparece el vacío, hacia dónde se agacha el hombre de la barrera para ver dónde queda espacio para tirar la pelota y meter el gol. Lo que ocurre es que la Constitución no es una barrera temporal, que puede agacharse y moverse como le parezca, para que cuando se abra la ventana se patee el tiro libre. Y eso es lo que han hecho hoy al aprovechar la ausencia de cuatro legisladores para mantener una interpretación insostenible.

Quería empezar con el ejemplo de la barrera y la oportunidad para destacar precisamente lo oportunista de esta situación que no le genera legalidad ni legitimidad.

También dijo Brügge que le van a cambiar el nivel, le van a dar legitimación procesal, van a transformarlo en un cargo electo por el pueblo. usted sabe, señor presidente, que le creo. Es más, le creo al bloque oficialista que van a hacer esos cambios porque saben que van a perder las próximas elecciones, entonces empiezan a hacer ahora los cambios necesarios para poner las cosas en una situación mejor que cuando les tocó ejercer el Gobierno a ellos.

Usted dirá que estoy hablando del futuro, le digo que no es así. Antes que asumiera De la Sota, la Cámara de Acusación Penal fue, durante cuatro años, cuestionada como “la Cámara del perdón”; apenas asumieron la derogaron con una ley y distribuyeron su competencia entre todas las Cámaras Penales de la ciudad de Córdoba, hasta que designaron a los amigos. Cuando designaron a los amigos, volvieron a crear la Cámara de Acusación igual que antes.

Esto es lo que hace Brügge: ahora tiene en cuenta a los amigos, pero cuando cambien las cir-

cunstancias será constitucionalista en serio y pedirá elecciones, legitimidad procesal y todos los requisitos posibles y oportunistas. La Constitución no se defiende con actitudes oportunistas. Quería empezar con esto porque me pareció un argumento de ocasión referirse a nuestra oposición.

Entrando al tema que nos ocupa, sabemos que el Defensor del Pueblo fue instituido en la Provincia de Córdoba a partir de la reforma de la Constitución de 1987. Todos estamos de acuerdo sobre la institución; no voy a ser yo quien pase, en este momento, a citar los antecedentes, porque bien lo han hecho otros legisladores.

Lo cierto es que, desgraciadamente, esto fue castrado en su actuación a partir de la ley que regula su ejercicio, y tanto lo fue que en la Provincia de Córdoba es difícil encontrar alguna persona que sepa dónde queda el domicilio del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo provincial es una oficina adonde van a quejarse viejitas que no saben lo que pasa y un empleado las consuela; en realidad, trata más cuestiones psicológicas que institucionales; atiende zonzos, descreídos y gente que no conoce, porque es la quinta rueda del carro, es una corneta de avión. Con toda tranquilidad digo que no sirve para nada, no ha hecho nada; no hay ningún acto memorable que podamos recordar de esta institución y sus integrantes en sus veinte años de actuación. Nada, salvo nombrar gente y sacar una nota en los diarios, de cuando en cuando.

En realidad, este fracaso absoluto desde el punto de vista institucional sirvió de experiencia.

No se me vaya legislador Brügge, porque estoy hablando.

Digo que el fracaso sirvió de experiencia porque cuando la Constitución nacional del '94 reguló el instituto se fijó en la experiencia de Córdoba -la Constitución de la Provincia de Córdoba fue una de las fuentes más importantes de la reforma del '94-; se le dio legitimación procesal en el artículo 86 de la Constitución nacional para evitar que se desnaturalizara, como luego ocurrió en la práctica.

También se puso expresamente en la norma constitucional nacional que eran los “presentes” los que tenían que aprobar o no, lo que no decía la Constitución de Córdoba. ¡Claro!, lo que ocurre es que en la Nación tenemos una Cámara de Diputados de 257 miembros –que todos cono-

ce mos– y un Senado de 72 miembros, por lo que se justifica que fueran los presentes, no en Córdoba, donde somos 70 miembros y tenemos presencia “tranquila”. Esa es la razón por la que no eligieron al Defensor hace 21 días, porque estaban todos; esperaron que la barrera se agachara para tirar el tiro libre y, así, burlar la Constitución.

Fíjese, señor presidente, señores legisladores, la experiencia del Defensor del Pueblo de la Nación, institución establecida en el año 1994. Lleva 14 años de actuación y todo el mundo lo conoce por la prensa, incluso algunas municipalidades de nuestra Provincia están haciendo convenios para establecer delegaciones –lo sabemos por los diarios–, espero que sean muchas porque es una institución que funciona y que está dotada de los medios legales para hacerse sentir; no este instituto harapiento que no sirve para un “carajo” y que se disfraza de institucional solamente para esconder otras situaciones...

Sr. Nicolás.- Para eso poné a un cura. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador.

Por favor, señores legisladores, soliciten el uso de la palabra o las interrupciones. Esta Presidencia va a cumplir con lo que corresponde. Cuando algún legislador quiera interrumpir levante la mano, y entonces se seguirá el procedimiento que normalmente se utiliza en este Poder Legislativo.

Continúa con el uso de la palabra el legislador Miguel Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.- A esas alusiones personales las hace el legislador Nicolás, porque sabe la diferencia entre el cura y el que él patrocina.

– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, señores legisladores, no dialoguen entre sí. Pidan el uso de la palabra.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Vamos a la interpretación de Brügge y no a la barra que hoy está ampliada, que tiene nuevos integrantes.

No es una institución de alta trascendencia y el legislador Brügge ha hecho un análisis interesante. Algún alumno de Derecho diría: “bien fundamentado”, y hasta yo podría decir: “bien fundamentado”. De lo que Brügge se olvidó –y ya se fue– fue del contexto, porque la Constitución no

puede interpretarse sin el contexto social y político donde se va a aplicar.

La discusión sobre los dos tercios de los presentes o los dos tercios del Pleno de la Cámara no es un invento que hicimos para el Defensor del Pueblo, sino que se trata de una larga tradición en la historia constitucional argentina.

Casi todos sabemos que la cuestión de “los presentes” y “el Pleno” se inauguró en la reforma constitucional de 1949, con motivo de la sanción de la Ley 13.233, que establecía la declaración de la necesidad de la reforma y los puntos que en ese entonces debían fijarse. Más allá de su contenido, lo cierto es que esa importante reforma –que muchas veces he elogiado, ya que fue la recepción del estado social de derecho en la Argentina– inauguró un largo debate en las cátedras de Derecho Constitucional sobre si los dos tercios eran de los presentes o del Pleno; digo “largo debate” porque la tradición duró décadas y había enorme literatura de un lado y del otro. Sin ir más lejos, recuerdo que el último Defensor de “los presentes” en la Provincia fue el profesor Tagle, ya fallecido.

Pero esta discusión, señor presidente, que llegó hasta la década del '90, quedó saldada y ya nadie discute, en el marco de la interpretación de la Constitución de la Nación, que el artículo 30 tampoco dice nada acerca de la “totalidad”; y la reforma del '94 –que bien pudo agregarla porque puso el adverbio “totalidad” en muchos de sus artículos– no la incluyó en este artículo, sencillamente porque la discusión, después de cincuenta años, quedó saldada. La reforma del '94, al sancionar la Ley 24.309, se hizo sobre la mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara, con absoluto consenso de la bancada oficialista y de la bancada opositora.

Esta discusión sobre los dos tercios de los presentes –cuando no dice nada la Constitución– quedó saldada; ya no hay nadie en las cátedras de Derecho Constitucional que sostenga esta interpretación atrabiliaria, ya es una mentira reconocida, ya no hay nadie que vuelva a sostener que se pueda reformar la Constitución con los dos tercios de los presentes, aunque el artículo no diga nada. Digo esto porque todo, en la interpretación de Brügge, responde a que no figura la palabra “totalidad”; por eso le respondo –apoyado en lo que se ha dado en llamar “Derecho Constitucional

de la Costumbre”— que tampoco lo dice la Constitución Nacional en la institución más importante que regula, que es el Poder Constituyente derivado. Sin embargo, no hay nadie en la Argentina que sostenga semejante barbaridad.

Con estos antecedentes, un profesor de Derecho Constitucional no puede armar una ingeniería para decirnos que, porque no está la palabra “totalidad”, debe entenderse que son “los presentes”, porque el artículo 124 no se refiere a “presentes” ni a la “totalidad” sino que incluye la expresión “sus miembros”.

Me interesaba traer estos artículos porque con ellos, más la teoría de los actos propios, creo demostrar que nuestro Defensor del Pueblo se está “zampando” en la realidad política de Córdoba, violando la Constitución de la Provincia. No tenemos nada que decir, nada hubiéramos dicho si aquí estuvieran los 47 votos; tampoco nada quiero expresar sobre el candidato que viene —que tome nota el gordito que me grita desde atrás—; no digo nada sobre eso, simplemente...

Sr. Presidente (Fortuna).— Perdón, señor legislador, le voy a pedir que no use calificativos físicos para hacer referencia a su colega legislador. (Aplausos).

— Murmullos las bancas.

Sr. Presidente (Fortuna).— El legislador Miguel Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Ortiz Pellegrini.— Sí, por supuesto.

Sr. Nicolás.— No, déjelo así.

Sr. Presidente (Fortuna).— Continúa en el uso de la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.— Señor presidente: tal como está la cosa vamos a tirar un tiro libre con la barrera agachada, “zampando” al Defensor del Pueblo y entonces quiero...

— Murmullos las bancas.

Sr. Ortiz Pellegrini.— Sí, de eso no tengo dudas por eso no lo va a atajar.

Estas interrupciones son buenas para que empiecen a gritar todos.

— Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Fortuna).— Voy a pedir a los señores legisladores y público presente que por favor respeten el desarrollo de la sesión y no dialoguen entre sí.

Continúa en el uso de la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.— Señor presidente:

permítame contar una simple anécdota: yo quiero y respeto más que nadie en el mundo a la Unión Cívica Radical, partido con el cual me siento absolutamente consustanciado...

— Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Fortuna).— Voy a pedir a las barras que no hagan ningún tipo de expresiones porque no corresponde, ya que están exclusivamente para escuchar el desarrollo de la sesión.

Continúa en el uso de la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.— Señor presidente: voy a omitir lo que pensaba para no echar más leña al fuego.

Finalmente, digo que desde hace algunos años la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que invariablemente venía sosteniendo que la formación de las leyes era parte de una cuestión política no justiciable, ha variado a partir del caso Soria de Guerrero, que precisamente se refería a la Convocatoria de la Convención Constituyente del '57, determinando que en circunstancias puntuales, cuando no se respeta los artículos de la Constitución los jueces de la Nación, y por ende de la Provincia, pueden intervenir para corregir los defectos de la sanción cuando abiertamente viola sus postulados.

De tal manera, el Frente Cívico viene a sostener la doctrina consolidada a partir de 1994: que se trata de los dos tercios de la totalidad de los miembros, y que una sanción oportunista como esta viola expresamente la Constitución. En tal sentido iniciaremos las acciones legales del caso para establecer —en algún tribunal que podamos— la vigencia de la Constitución.

Mientras tanto, vale para nosotros sostener que la Constitución no se negocia, no se cambia ni se modifica por oportunidades.

Nada más. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).— Tiene la palabra el señor legislador Rossi.

Sr. Rossi.— Señor presidente, hace poco más de 25 años estaba estudiando para ver si podía ingresar a la facultad y Raúl Alfonsín venía a Córdoba para participar de un acto en Redes Cordobesas, en Barrio General Paz. Ese fue el primer acto de mi militancia política que mantuve dentro de las filas de la Unión Cívica Radical.

El 10 de diciembre pasado me tocó por primera vez, luego de 25 años, representar a mi querido partido en una lista y que la voluntad po-

pular me trajera a esta Legislatura de la Provincia.

Vaya la paradoja, hoy se cumplen 9 meses desde que asumí la banca de legislador de la Provincia y estoy viendo cómo arteramente se está por producir una flagrante violación de la Constitución provincial. Quiero referirme a determinadas cuestiones que son institucionales, porque el tema de la violación al artículo 124 de la Constitución prefiero dejarlo para cerrar mi argumentación.

Todos los que estamos acá integramos partidos políticos, y tanto la Constitución de la Nación como la de la Provincia dicen que los partidos políticos son herramientas esenciales y fundamentales del sistema democrático. Cada uno de los que estamos acá hacemos política y nos toca todos los días tratar de sobrellevar el desprestigio que tiene la clase dirigente y la actividad política.

Desde que empecé a militar, pero fundamentalmente desde el 10 de diciembre, me propuse tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para que la clase política deje de estar desprestigiada, y cuando vea que no pueda hacer todo lo que me propuse por lo menos voy a tratar de que la Unión Cívica Radical siga representando a la masa de la sociedad argentina que tenga en cuenta determinados principios y valores, voy a hacer todo lo posible para que la Unión Cívica Radical siga siendo señalada como el partido de la democracia, de los derechos y de la igualdad de oportunidades.

Si uno analiza el funcionamiento de los partidos políticos en el mundo puede decir que estamos en la Argentina, donde hoy se habla de que no existen más los partidos políticos, las ideologías, los principios y los valores y que sólo valen los candidatos. Pero me niego a la mediocridad, porque si uno busca en el espejo de lo que pasa en las democracias más desarrolladas del mundo se dará cuenta que el objetivo no tiene que ser seguir en la mediocridad del sistema político de Argentina sino imitar esas democracias del mundo que, ¡vaya paradoja!, son las más importantes en materia económica y son señeras en el mundo.

Cito solamente algunos ejemplos: la democracia norteamericana nos ha dado una lección con Barack Obama discutiendo con Hillary Clinton en un mismo partido político y contando cada uno de los delegados que después iban a designar por el voto indirecto a quien sería el candidato, y segu-

ramente a ninguno de ellos -que se los elegía en cada uno de los Estados de Norteamérica- se les cruzaba ni siquiera la duda sobre cuál iba a ser el voto al momento de elegir el candidato. Y hay dos partidos políticos fuertes, con ideas similares y una visión distinta del mundo.

En nuestra Madre Patria, España, permanentemente pelean en elecciones democráticas el Partido Popular y el Partido Socialista, hace poco Mariano Rajoy perdió las elecciones ante Rodríguez Zapatero, pero funcionan dos partidos políticos con ideas, principios, valores y prohombres.

En Francia pasa lo mismo, Ségolene Royal del Partido Socialista, que representaba una idea, perdió las elecciones con Nicolás Sarkozy y fortalecieron la democracia y los partidos políticos en el mundo.

Sin ir más lejos, para citar casos de Latinoamérica, el APRA peruano dio una fenomenal demostración de lo que es el fortalecimiento de un partido político centenario y de mucho tiempo produciendo el triunfo de Alan García en las últimas elecciones de ese país.

¿Por qué no querer lo que pasa en las democracias del mundo?, lo que pasa en Chile, en Brasil, ¿por qué contentarse con partidos políticos debilitados que un día representan unas ideas y otro día imaginan otras? Estamos en el año de la reforma política, si es que llevamos adelante muchas de las ideas que estamos discutiendo en la comisión pertinente, y me parece que tenemos que hacer honor a esa reforma política; la gente va a volver a creer en las instituciones cuando mejoramos los partidos políticos.

Recuerdo un libro, que recomendaría a lean, de un filósofo francés Pierre Sambayón que habla de la contra democracia. Allí se hace referencia a que en la Constitución de cada país no están solamente los institutos que van a fortalecer la democracia sino que, además, están las asociaciones intermedias. También hace referencia al enorme papel que juegan los medios de comunicación en la formación de los ciudadanos.

No hace falta ser muy inteligente para ver cómo visualizó la sociedad el tema de la designación del Defensor del Pueblo; se hizo un acuerdo de apuro para sancionar, en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y la designación de un día para el otro.

Quisiera sintetizar mi responsabilidad partidaria leyendo un párrafo de una nota que firmó Sergio Suppo, que me pareció una extraordinaria definición de lo que estaba pasando en el seno de la Unión Cívica Radical: “la simplificación de dividir a los radicales entre los que son subordinados del peronismo y los que se sienten adherentes al juecismo combinó, una vez más, con la ausencia de un discurso que entregue al partido una identidad propia por encima de los visibles y nada presentables acuerdos que cada media hora hace cada dirigente en nombre de sus propias ambiciones”. Esta es la síntesis de una nota del 24 de agosto del 2008, que apareció en La Voz del Interior, que es la más clara expresión de lo que estaba sucediendo en el seno de la Unión Cívica Radical. Para que no aparezcan chicanas o dobles discursos, les quiero señalar que soy de los que piensa que la peor cosa que puede hacer la Unión Cívica Radical es coadyuvar para que uno de los peores intendentes que tuvo la ciudad de Córdoba pueda ser Gobernador en el año 2011. No tenemos nada que ver con eso; pero tampoco tenemos nada que ver con Unión por Córdoba, porque la democracia requiere diálogo, requiere consenso, pero no requiere atajos para tratar de sacar figuras de una manera poco presentable frente a la sociedad. Quiero partidos políticos fuertes y dirigentes que se hagan eco de estas cosas.

Voy a contar una anécdota que me sucedió esta mañana y que me marcó en serio. Me vino a visitar a mi despacho la hija de un amigo, que tiene diecisiete años, y me dijo que quería empezar a militar en las filas de mi partido; y, hablando de los liderazgos, de cómo estaba el partido, de los partidos políticos y de la democracia, me preguntó, ingenuamente, a quién le señalaría como ejemplo a seguir en su trayectoria política. En principio, se me cruzaron un montón de nombres: Yrigoyen, Alem, Balbín, que, a pesar de que en el '73 sabía que Perón le iba a ganar cómodamente las elecciones, dijo: “voy a ser candidato de este partido político sabiendo que pierdo, para ofrecerle una alternativa al país”; le iba a hablar de Alfonsín, de la recuperación de la democracia, de Aristóbulo del Valle, que después de ser vicepresidente terminó vendiendo ballenitas en una esquina de Buenos Aires. ¿Pero saben qué se me ocurrió? Me di cuenta que esta mañana había leído un titular de un diario que decía: “El ex Intendente radical Hugo Madonna está trabajando como jefe de

gabinete de asesores en la Subsecretaría General de la Presidencia de la Nación”. Levanté la vista, la miré a los ojos y le dije: hija, no sea como Hugo Madonna. Porque hay que dar ejemplos, hay que decir claramente cómo uno es; hay que dar testimonio de que uno está por los valores, por los principios y no por los cargos.

Voy a decir algunas otras cosas. Creo que la mejor respuesta para quienes decían que el radicalismo un día acordaba con unos y otro día con otros, es que el radicalismo se fortalezca como expresión política, con una visión amplia para recibir a todos, pero defendiendo la democracia y los partidos políticos desde su propio sector.

Ahora me voy a referir a este “atajo”, que busca violentar el artículo 124 de la Constitución provincial, diciendo algunas cosas simplísimas. La Unión Cívica Radical, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por tener una posición de claridad meridiana respecto a intentos de otras fuerzas políticas de “sacar” determinadas cuestiones con el voto de los dos tercios de los presentes. El radicalismo, en el año 1949, dijo que la Constitución se tenía que modificar por los dos tercios de la totalidad; es decir, se tenía que declarar la necesidad de la reforma por los dos tercios de la totalidad de la Cámara. Sin embargo, el peronismo la aprobó por votación de los dos tercios de los presentes. Así nos fue; revisemos nuestra historia.

La Unión Cívica Radical, cuando Menem pretendía violentar la Constitución aplicando una interpretación que hacía Durañona y Vedia, también dijo que no había ningún tipo de dudas de que para modificar la Constitución nacional hacían falta los votos positivos de los dos tercios de la totalidad de la Cámara. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical ha dado testimonio en ese sentido, de no violentar la Constitución y de no forzar acuerdos para “sacar” determinados cargos.

Aparte de eso, el artículo 124 dice claramente: “La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros designa al Defensor del Pueblo”. Los miembros de esta Legislatura son 70; y, por si a algún perezoso no le gusta hurgar en los distintos artículos de la Constitución para hacer comparaciones, puedo remitirlo al artículo 116 –que está en la página anterior, no sea que pierdan tiempo dando vuelta hojas-, porque cuando tiene que diferenciar lo hace; ese artículo se refiere al procedimiento de la acusación, y dice: “La comisión culmina sus diligencias en el término de

veinte días y presenta dictamen a la sala acusadora”, y habla de los dos tercios de los miembros “presentes”, por lo que no hay posibilidad de admitir otra cosa.

Pero, por si nos olvidáramos del texto legal y buscáramos solamente en el sentido común, podríamos advertir que –y nos pongamos la mano en el corazón- hace 21 días esta Cámara no trató la designación del Defensor del Pueblo porque contaba con 46 votos y no con 47, en cuyo caso no hubiera dudado en aplicar esa mayoría, tratando y aprobando la designación que estamos considerando hoy. No lo hizo porque se interpretó que hacían falta 47 votos; pero hoy, aprovechando que hay legisladores ausentes, van a dar el “zarpazo” en un momento en que la Provincia se hunde, en momentos en que el Gobierno está por emitir bonos, cuando la Provincia está peleando con la Nación porque ésta, por una cuestión revanchista, no gira los fondos, haciéndonos padecer por la posición que el Gobierno provincial tomó con respecto al tema del campo. Frente a eso, estamos por violentar la Constitución de la Provincia utilizando un atajo, para garantizar la designación del Defensor del Pueblo que, estamos seguros, está en contra de la interpretación del artículo 124 de la Constitución.

Lo he dicho en los medios de comunicación y lo quiero ratificar acá, porque no quiero que ni a mí ni a nadie le suceda lo mismo que a Obregón Cano hace unos años, cuando pasando por una situación determinada advirtió que en un momento de la discusión se iba a violentar una interpretación de la Constitución provincial. Para eso, está el resguardo de la Justicia, y voy a concurrir a ella para que se expida sobre si esta Legislatura ha aprobado bien o mal la designación del Defensor del Pueblo con los votos que existen.

Para finalizar, quiero destacar algunas cosas que deben ser de Perogrullo: ¿por qué la Constitución de la Provincia pide dos tercios de la totalidad de los miembros? Porque la política, la democracia, el funcionamiento de las instituciones requiere búsqueda de diálogo, soluciones, debates, búsqueda de consenso entre hombres que hacemos política, porque por encima de ella está la idea del bien común. Buscamos una institución que sirva para todos los cordobeses, una institución fundamental de la democracia a través de la

cual cada cordobés pueda reclamar por sus derechos y sentirse resguardado.

Con lo que estamos haciendo desdeñamos el diálogo, la búsqueda de consenso y buscamos atajos para la designación del Defensor del Pueblo. Me parece que le estamos haciendo un flaco favor a la consolidación del sistema democrático, a 25 años de haber recuperado la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: escuché a mi correligionario, con quien tengo algunas diferencias conceptuales expresadas en charlas de café, hablar de Sabattini, Balbín e Yrigoyen; soy de los que creen que la Unión Cívica Radical se dignifica ganando elecciones, porque es la única manera en que un partido político pueda acceder al gobierno y llevar adelante sus convicciones partidarias y propuesta de gobierno.

Digo esto porque, quizás despectivamente, se hizo referencia a un grupo de seis legisladores de la Unión Cívica Radical que hace más de 35 ó 40 días presentamos, conjuntamente con la firma de más de 100 intendentes de la Provincia, la postulación de Mario Decara. Esos intendentes son los que considero, en términos conceptuales, dignifican a la Unión Cívica Radical, puesto que ganan su territorio en representación de este partido.

También coincido con mi correligionario amigo en que hay que seguir apostando hacia adelante en la reforma política, para que ocupen cargos los representantes de los partidos políticos que realmente lo deben hacer, en una integración regional; y para que nuestro partido, tan horizontal, sea representado por legisladores provinciales que ayuden con su aporte de votos a nuestro candidato a gobernador. Por supuesto, coincido enfáticamente en que el radicalismo no debe perder sus convicciones y su identidad partidaria, no solamente en el 2009 sino también en el 2011.

Destaco estos conceptos porque conozco mucho a Dante Rossi, y sé que es respetuoso de la Justicia y las instituciones, a diferencia de otro legislador que me precedió en el uso de la palabra. Cuando los acuerdos vienen bien, no se habla de la Justicia y sí de las instituciones y la ley. No olvidemos que no hace mucho tiempo se llevaron gallinas al Palacio de Tribunales de la Provincia de

Córdoba como una clara ofensa contra la institución madre de la Justicia.

Sin embargo, cuando las urnas no andan bien ponen moños negros y dicen que están de luto; cuando la Constitución provincial en una interpretación legal no los favorece hablan de la Constitución nacional, y por allí algunos se olvidan cuando hablaban de las universidades.

Entonces, digo que la Presidenta Kirchner con lo que significa su figura, su representación, no está cumpliendo con la coparticipación federal -que está bien clara y precisa en la Constitución nacional-, con la redistribución de la riqueza en toda la República Argentina. Fíjense la diferencia -y la importancia- entre lo que eso significa y la elección para ocupar el cargo que hoy estamos discutiendo.

Pero también -para los que son ingenieros- es cierto lo que se planteó de que las dos terceras partes de 70 es 47, mas también es cierto que las dos terceras partes de los presentes es 44 porque somos 66 los legisladores presentes.

Fíjese usted, señor presidente, por lo que interpreto, va a haber muchos más legisladores que van a votar a favor de Mario Decara que las dos terceras partes de los que hoy estamos presentes, de los que hoy hemos tomado la decisión política de discutir el tema.

A lo largo de mi trayectoria política, con muchos errores, señor presidente, -usted lo sabe mejor que nadie- gané y perdí elecciones en representación del radicalismo de mi ciudad, Río Segundo, pero siempre encolumnado y defendiendo a rajatabla las convicciones de mi partido, con la boleta 3. Sin embargo, alguien por ahí planteó el tema del Memorex; entonces, digo con todo respeto, porque aparte la considero una gran militante política en representación de su partido y coincidimos muchas veces en que si hay algo que tiene claro -me estoy refiriendo a la legisladora Liliana Olivero- es que nunca entró colgada del saco de otro partido político para ocupar su banca, que teniendo en cuenta su militancia, creo que si esto se discute en la reforma política con una reforma constitucional por ahí vamos hasta a coincidir en que no se puede ser candidato a gobernador y a legislador en el mismo voto. Así que queremos darle transparencia a esta discusión hacia adelante.

Con relación al Memorex, le diría que gire hacia atrás y se lo alcance a la legisladora Gene-

sio de Stabio, porque en una reunión de Labor Parlamentaria la legisladora nos dijo a todos los integrantes de esa comisión que iba a votar a favor de Mario Decara como Defensor del Pueblo, propuesto por este grupo de legisladores. Cuando hablamos de transparencia política y de reformas hacia adelante por ahí algunas llamadas telefónicas nos hacen cambiar de opinión.

También la legisladora Liliana Olivero dijo que ella no borra con el codo lo que escribe con la mano, y en presencia de todos, en Labor Parlamentaria, ella borró con la mano -no con el codo, sino con la mano-, lo que habían firmado conjuntamente el Frente Cívico y ella para la candidatura del Padre Alessio.

Digo todas estas cosas, señor presidente, porque ¡qué vamos a hablar de fútbol acá!, a ver cómo nos agachamos en la barrera...

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador.

El legislador Varas le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Faustinelli.- Sí, señor presidente. Aparte, es hinchas de Instituto como yo, con todo gusto le concedo la interrupción.

Sr. Varas.- Nos parecemos en eso, nada más.

Señor presidente, usted recién llamó al orden a los legisladores para que no calificaran o adjetivaran. Le pido que haga lo mismo en este momento.

Gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: la verdad es que no sé por qué lo dice el legislador Varas, porque creo haber sido totalmente respetuoso en lo que he estado planteando.

Decía -recurriendo a una comparación futbolística- que había algunos que se agachaban en la barrera, cosa que jamás he hecho; sí tuve que estar en la barrera, lo hice permanentemente; quizás otros se expresaron de otra manera porque no sólo se agacharon en la barrera sino que escaparon a través del túnel de la Unión Cívica Radical. (Aplausos).

Digo esto, señor presidente, porque, ya que hablamos de Memorex, también haría falta que el legislador Ortiz Pellegrini -lo digo con todo respeto, él bien lo sabe- se tome una pastillita, porque cuando metafóricamente citó un ejemplo futbolísti-

co debió recordar que quien pidió la prórroga para esta sesión, para el día 10 de septiembre a la hora prefijada, fue precisamente el Frente Cívico, adhiriendo a la postura expresada por la legisladora Olivero en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. De tal manera, no había ningún legislador que no conociera que estaba totalmente dispuesto, a través de esta sesión especial, que se iba a discutir sobre dos nombres: uno, propuesto por un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical; el otro, propuesto por el propio Frente Cívico y Social, en la figura del padre Alessio.

Por otra parte, señor presidente, adhiero totalmente a lo expresado por el legislador Miguel Nicolás; si algunos creen que cambié de postura y en una interpretación rápida hablan de Memorex, con sinceridad debo decirles que soy ingeniero civil y a veces temo preguntarle a un abogado cuánto es dos más dos, porque para mí es cuatro, pero para algunos abogados aquí presentes, si bien puede ser cuatro, siempre se puede apelar.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.

Sr. Varas.- Señor presidente: ¡por fin se le está viendo la pata a la sota! Hace algunos días, cuando discutíamos algunas cuestiones como la retención sobre las jubilaciones, Ingresos Brutos; cuando se imponía la sinrazón por el número, llamaba a la conciencia y trataba de hacer alguna reflexión desde los valores, como la ética y la moral, que acuñamos en nuestra ideología quienes provenimos del peronismo –así como en la suya quienes provienen del radicalismo– y está visto que todo esto, en el afán de sentirse clase política, acaba siendo pisoteado.

Obviamente, es la clase política la que le da la espalda a la gente; es la clase política la que lleva a las instituciones a naufragar, la que las “bardea”, ensucia y pisotea; es la clase política la que no escucha lo que la gente dice; sin embargo, se arroga la representación, y entonces da la impresión que estamos jugando al tute o al truco, donde el sentido es ganar, sin importar cómo.

Realmente es lamentable que los valores, la moral y la conducta de muchos de los que estamos aquí no se refleje a la hora de los votos. Obviamente, si no hay conciencia es difícil hablar de valores. Ante ciertas situaciones –no sé si ha-

cer una reflexión o un clamor– me planteaba: hay dos formas de llegar a una situación de desesperación; conozco una: gente que se tiró kerosene encima porque no le daban un pase a su hijo discapacitado, y eso es desesperación; la otra es incinerarse políticamente, eso creo que tiene explicación, cierra siempre y cuando esté garantizado el futuro, siempre y cuando no tenga que volver a dar la cara. Y me da la impresión de que en esta ocasión estamos hablando de eso, porque hablamos de la Constitución y del respeto a las leyes que ¡oh casualidad! es parte del juramento que nosotros hicimos cuando asumimos –algunos con la mano en la Biblia, otros por sus creencias juráramos defenderla y honrarla-, pero no es lo que está ocurriendo, sino que mandan al carajo a la Constitución, y pido disculpas por el término pero es la verdad. La Ley de Jubilaciones es inconstitucional y qué me importa; las detenciones en la noche son inconstitucionales, y qué me importa.

En realidad, estas son las circunstancias que seguramente los van a hacer hablar y “chusmear” un montón de veces. Pero fíjense ustedes: “juntos trabajaremos y mejoraremos la convivencia y el funcionamiento de las instituciones cordobesas”, y “trabajaremos por la transparencia” dijo nuestro Gobernador en el año 2007. ¿De qué estamos hablando? Creo que son actos de desesperación porque, obviamente, saben que vienen los bonos, a pesar que cierran de alguna manera con el Estado Nacional; saben que no pueden pagar sueldos, y es más fácil –antes de enfrentar esa situación que los condena para el futuro- negociar, apretar, coaccionar, llamar por teléfono, ofrecer vacaciones. Eso es más fácil, pero rompe con la institucionalidad, con lo que quiere la sociedad; crea un divorcio y un abismo que es cada vez mayor. Está claro que no es el discurso únicamente, sino que es la conducta de uno la que lo refrenda, es el andar por la vida de esa manera lo que va generando una instancia diferente.

Estoy profundamente convencido de que la convivencia política, la tolerancia y el diálogo son las herramientas fundamentales para consolidar la democracia.

Recién escuchaba al legislador Rossi cuando decía: “En realidad la Constitución cuando pone una mayoría agravada es para generar consenso”. Y me da la impresión que se perdió las

sesiones anteriores, porque tampoco hubo consenso con los industriales a la hora de aumentar Ingresos Brutos, tampoco hubo consenso con los trabajadores, magistrados y todos los involucrados a la hora de aplicarle retenciones a las jubilaciones.

De qué estamos hablando si el Gobernador -que viene teóricamente conduciendo el proceso- termina con un discurso hueco, vacío, que lejos de darle legitimidad se la quita, que obviamente está mostrando que no hay capacidad, que sigue -lamentablemente- erosionado en sus cimientos, porque llegaron con el fraude y necesitan el fraude para seguir. Esto en algún momento se va a discutir, en una de esas no lo haremos nosotros; a esto, en algún momento, quienes realmente aprecian la Justicia lo van a investigar.

Fíjense ustedes que no es casualidad, es más, él mismo citaba a Walter Lippmann: "donde todos piensan igual nadie piensa mucho". Se ve que han logrado cooptar a parte de la oposición para que no piensen; se ve que necesitan que la gente no se eduque, no piense, no progrese. Entonces el "paz y progreso" que se prometía, en realidad, es al estilo brasileiro: "meta palo y a la bolsa".

Siguen siendo un modelo neoliberal en el país de hoy y quieren ser ejemplo, por eso va a volver la exclusión en Córdoba, por eso se van a perder puestos de trabajo, por eso hay que darle palo a los que protesten y meterlos en la cárcel para callarlos.

Fíjense una cosa -independientemente de lo que "chicharreen"-: ¿saben por qué les molesta?, porque saben que es cierto, los que tienen vena peronista sienten que se les estrujan las tripas porque el peronismo es revolucionario y están entregando lo popular a intereses que no son los del pueblo. Se enojarán y me darán vuelta la cara, o alguno me meterá el pecho, pero esto es real, es lo que está pasando. Es más, compañeros que fueron detenidos decían: "pensar que yo trabajé y milité para estos", ¿o no lo vimos por televisión?

Son las operaciones mediáticas, está claro que imponer esto es cumplir con lo que decían; a esto no lo inventé yo, está en los diarios. La Voz del Interior, del miércoles 20 de agosto, decía: "Prórroga para la elección", pero el PJ reiteró que el acuerdo era para la designación de Decara, propietario de un hotel en Villa Giardino, o sea que no había opción, sólo había que buscar el momen-

to para dar el zarpazo.

Está claro que Decara no es un eximio -como se dijo acá- ya que fue denunciado por mal desempeño en la función pública en su primera gestión en Villa Giardino. El 10 de noviembre de 1985, a pesar del "tufillo" que había, él mismo pidió una auditoría por presión de los vecinos y de los medios. ¿Saben qué ocurrió? Los radicales -creo que en ese entonces estaba como Ministro de Gobierno don Jorge Joaquín Cendoya- fueron los que les comunicaron a algunos senadores que en ese momento habían pedido un informe porque efectivamente se habían cometido ilícitos, y que habían dado la orden de promover una denuncia penal.

En esa denuncia penal se dice que violó la Ley de Contabilidad de la Provincia, la Ley Orgánica Municipal y las propias ordenanzas. Además que no sólo ha tornado de insanablemente nulo los actos administrativos sino que sus irregularidades constituyen presuntamente delitos graves.

Paradójicamente, quién patrocinaba a Pedro José Arano, Carlos Benito Roldán y Lucrecia Amaro Sabre de Cabana, todos ediles del justicialismo, era el doctor Juan Manuel Zuriaga. Para cerrar, y verle la pata a la sota, tenemos que dirigirnos al Boletín Oficial del 13 de febrero de 2008, que dice: "El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario resuelve: Artículo 1º.- Establecer que el doctor Juan Manuel Zuriaga, DNI 5.411.083, se mantenga en el cargo de la Secretaría de Faltas Leves y Graves como nuevo Secretario. Artículo 2º.- Dispóngase el cese en la función del doctor Juan Manuel Zuriaga como Secretario de Oficina en la Formación Ética y Democrática".

Cuando uno ve estas cosas no sale del asombro, pero es más grave aún porque, en realidad, no sólo pisotean las instituciones sino que, da la impresión, que están preparando la retirada y tratando de cerrar los negocios.

Obviamente, en esto no tienen que ver los partidos porque seguramente muchos militantes del peronismo y del radicalismo -entre los cuales tengo amigos- se estarán retorciendo, porque se están mancillando esas instituciones; digo que no tienen que ver los partidos porque es un acuerdo o un pacto -como la prensa ha dicho- entre grupos que defienden estas situaciones.

Para qué presentar denuncias de esto si el fiscal Amayusco las para. Para qué hablar de estas cuestiones que no le interesa a la gente, debi-

do a que hablamos a sus espaldas sin escuchar como corresponde. Las Audiencias Públicas no van a contar con la adhesión que esperaríamos, aunque, tal vez, esto es lo que se está pretendiendo que suceda.

¿Vamos a dejar una institución que debe defender los derechos del pueblo en manos de una persona que no supo o no quiso hacer bien las cosas en su gestión? ¿Vamos a poner esta institución en manos de una persona que puede ser un excelente generador de negocios, un hombre con vocación que no pudo, no supo o no quiso administrar bien? ¿Vamos a dejar el reclamo de los desposeídos y de toda la sociedad en sus manos?

Imaginémonos consultar al Defensor del Pueblo por problemas relacionados con el tema de “las minas a cielo abierto”, o por los problemas que se suscitan con las tierras del norte. ¿Le plantearíamos a él la apropiación de los recursos de los pobres?

Me espanta ver que muchos son cómplices de estos pactos y negocios espurios, sin importarle la gente, jugando con el destino de la Provincia de Córdoba y el país en la medida que se salga “bien parado”; lo digo con dolor, ya que con esto se mancillan los principios del justicialismo y se compra la voluntad de la gente. Siento vergüenza ajena porque esto, que ha sido extorsivo -por la necesidad de tener permanencia política-, está rompiendo la institucionalidad de dos partidos que han sido señeros. Esto es abonar lo que vino.

¿Qué diría Perón, Balbín, Leandro N. Alem, Yrigoyen o Alfredo Palacios? ¿Algún legislador del oficialismo sabe qué dirían? Yo lo puedo escuchar, porque en una de esas aprendo algo. Y no le hablo desde la soberbia, le hablo con el dolor que me provoca que el peronismo siga empleando el modelo liberal. Se quiere imponer la clase política dando la espalda al pueblo, pero la gente con el tiempo se va a ir dando cuenta.

Espero no escuchar más al Gobernador de la Provincia llamando al consenso, a la institucionalidad y a la transparencia, porque esto no es muestra de eso; esto no ratifica esa conducta que dice ser democrática. Me da la impresión de que olvidó que militaba en el peronismo de base, era más opositor todavía que las líneas de Perón.

Estas cosas son las que duelen, distorsio-

nan y quitan crédito; será que tampoco se quiere trabajar en institucionalidad, que se pretende destruir las instituciones para facilitar los negocios corporativos, la entrega del patrimonio, y adueñarse de las cosas de la gente.

Señor presidente, hace unos minutos pedí “conciencia”; en realidad, quisiera pedir un poco de “decencia” a la hora de discutir estas cosas. Esto no es hacer un juicio de valor; es tratar de buscar, en lo más profundo de nuestros seres, esa legitimidad que, por los votos, tendríamos que representar. Les aseguro que si consultáramos esto, muchos de los que votaron no sólo estarían desilusionados, sino que estarían pidiendo la posibilidad de votar nuevamente para cambiarlo.

No va a haber, como pedía el Gobernador, una “buena convivencia política duradera, que se sustente en el respeto a la ley y al Derecho”, justamente porque no existe respeto a la ley, y mucho menos al Derecho. Decía también el Gobernador que “no había otra alternativa en una democracia moderna, ya que el quebrantamiento de las normas lleva inexorablemente a la intolerancia, al conflicto y a la violencia”. ¿Se dan cuenta, señor presidente y señores legisladores, por qué nuestra Provincia está en esta situación de violencia? Porque quienes tienen que bajar una línea rectora, los que tienen que dar el ejemplo, no lo están haciendo. Se acomodan al sillón, al cargo y a la gestión de su futuro personal, no al futuro colectivo.

En otro párrafo nos decía: “Para seguir honrando la palabra empeñada, además de la prevención es preciso agilizar los mecanismos de investigación y sanción a los comportamientos corruptos”. Fíjense una cosa: eso no se puede hacer; obviamente, no lo vamos a poder hacer nunca en la medida que estos sean los ejemplos que les brindemos a la sociedad.

Allá, por la crisis del año 2001, uno de mis hijos, con dolor, ante mi pregunta de qué pensaba hacer, me contestó: “¿Y qué querés que haga, si esto está todo podrido?” Entonces, le dije: “Peleá por lo que vos crees. Apoyate en los pocos o muchos valores que te hemos dado. Tratá de vivir dignamente”. Aceptando el desafío, hoy está estudiando Ciencias Políticas. Obviamente, no quiero que sea de los políticos que creen que son una clase; quiero que sea de los que creen que con la política se puede transformar en beneficio del bien

común.

Honestamente, lamento estar viviendo esta situación porque estamos demostrando que los negocios están primero y la institucionalidad después.

Gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.

Sra. Genesio de Stabio (fuera de micrófono).- Pido la palabra, señor presidente, para hacer una aclaración.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora, pero hay dos legisladores anotados antes que usted.

Tiene la palabra, legislador Heredia.

Sr. Heredia.- No tengo inconveniente en cederle la palabra a la legisladora.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, pero la legisladora Dressino está anotada antes que la legisladora Genesio de Stabio. Corresponde preguntarle a la legisladora Dressino si no tiene inconveniente en cederle la palabra.

Sra. Dressino.- En absoluto, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Entonces, puede hacer uso de la palabra, legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor presidente. Celebro el retorno al recinto del legislador Faustinelli, puesto que ha recomendado que algunos legisladores tomemos "Memorex". Quiero recordarle que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a la que refirió, él tenía una nota de propuesta de designación del señor Decara como Defensor del Pueblo que estaba firmada por 7 legisladores de su bloque. Eran "7" los legisladores: los 6 legisladores que aún conserva, más una legisladora que ¡oh casualidad! hoy está ausente, pero que ese mismo día se había borrado de la lista.

Soy amante de los consensos, de los diálogos y de los acuerdos. En esa oportunidad, con sus 7 votos y su promesa de que más legisladores de su bloque iban a apoyar la postulación del señor Decara, este bloque manifestó que adhería al consenso siempre y cuando éste existiera. Pero resulta que a lo largo del día se evidenció que el voto de este bloque debía ser el que definiera una interna planteada y agravada durante el transcurso de las circunstancias.

En las numerosas llamadas telefónicas que

recibí durante esas largas horas en estos 21 días, se me sugirió que me fuera para poder votar en mi ausencia con los dos tercios de los presentes. De manera que ya estaba rondando en el ambiente esa posibilidad.

Pero como he sido elegida por el pueblo para dar la cara y no huir de las circunstancias, me hago cargo de mi situación, mi voto y mis palabras.

Esto es lo que quería decir, muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.

Sr. Heredia.- Señor presidente: la posición del bloque de Unión por Córdoba respecto de aspectos centrales de la discusión, sobre todo en lo que tiene que ver con la aceptación o no del criterio de los dos tercios de los presentes para designar al comisionado de la Legislatura, Defensor del Pueblo de la Provincia, ha sido extraordinariamente explicada por el legislador Brügge.

No soy abogado, por lo tanto, voy a tratar de que mi intervención muestre algunos aspectos políticos que, enredados en la discusión legal, nos estamos olvidando.

Esta es una sesión especial fundamentalmente política. Digo esto porque precisamente la voluntad política se expresa y manifiesta a través del diálogo, del debate, de la presencia y del voto, y es así como nosotros vamos a zanjar estas diferencias. Pero aquí se han hecho algunas admoniciones de tipo moral y político, algunas ni siquiera referidas al tema en cuestión. Entonces, es necesario que tratemos de ordenar el debate porque se han hecho algunas aseveraciones e incluso se han utilizado términos que no se compadecen con un debate serio acerca del tema que nos ocupa.

Fíjese, señor presidente, señores legisladores, que hace bastante tiempo que tenemos este tema en tratamiento –y no me estoy refiriendo al tiempo que nos está llevando esta sesión sino al transcurrido desde el momento en que se tomó la decisión de designar al nuevo Defensor del Pueblo– y se ha hecho una serie de observaciones a la metodología y actitud de cada uno de los señores legisladores.

La continuidad de la posición política de Unión por Córdoba respecto de aquel avance que tanto significó para la institución del Defensor del Pueblo la decisión de otorgar a la oposición política la designación de quien iba a controlar las acti-

vidades administrativas del Gobierno, fue interpretada por todos como un avance para la consolidación de la democracia en la Provincia. Recordaba que alguien me dijo: “La oposición ha logrado traer un nombre para que nosotros lo analicemos”. Pero nos hemos dado vuelta y estamos refregándonos en la cuestión institucional, y creo que es razonable que así sea, y no hablar de las personas, porque tenemos que definir este tema de la institucionalidad.

Entonces pensé que esto le hacía bien a la democracia en razón de que un partido –la primera minoría de la oposición– iba a designar nuevamente a quien controlaría la Administración provincial. Eso es muy satisfactorio, señor presidente; lamentablemente, con posterioridad aparecieron cuestiones intestinas que no conocemos pero que deben resolverse a través del diálogo, del consenso y del acuerdo.

Sin embargo, acá se dijo que aunque hubiese consenso, fundamentalmente entre quienes tenían la responsabilidad de nominar a quien va a ser el Defensor del Pueblo, estábamos discutiendo en vano porque esta institución no sirve para nada, no sirve para un carajo –se dijo aquí– porque es un instituto harapiento de la democracia. Cuando escuchaba esto, señor presidente, señores legisladores, pensaba: “Si esto es así, ¿por qué el interés para abortar la designación de quien ha sido propuesto por un bloque?”

Acá se habló de la conducta, que es lo más importante de cada uno de nosotros, para refrenar estos actos, y me sigo preguntando: ¿por qué razón se pretende abortar esta designación?, ¿por qué razón se utilizaron los métodos más abyectos en la última sesión? Aprietes, coacción, amenazas de despido. He visto a legisladores llorando en los pasillos de esta Legislatura por no poder soportar el apriete al que eran sometidos por algunos dirigentes. A tal punto llegó ese apriete y esa coacción que hicieron cambiar un voto que había sido garantizado previamente ante muchos legisladores que están sentados en estas bancas.

La pregunta que me hago es: si esta es una institución bastarda que no sirve para nada, ¿cuál es la razón para que algunos líderes, supuestamente democráticos de esta Córdoba, utilizaran esos métodos absolutamente fascistas para con los miembros de esta Legislatura?, y aún hoy,

veintiún días después, siguen usando las mismas prácticas de amenazas telefónicas, de ofertas telefónicas, para tratar de cambiar la posición de algunos legisladores.

Si esto no sirve para nada ¿por qué usamos esas prácticas fascistas, esas prácticas de los “blouseau noir”, de los camisas negras, y nos llenamos la boca hablando de democracia y de ética partidaria, y recordamos a líderes grandiosos? ¡Así que no sirve para nada!

Hace veintiún días, señor presidente, fue propuesto en esta misma Legislatura –y lo decía un legislador preopinante–, precisamente por un bloque que ha hecho una moción de tener otro candidato para el mismo cargo, aceptando un plazo para que se tratara este tema con posterioridad.

¿Cómo íbamos a saber nosotros hace veintiún días que iban a faltar legisladores a sus bancas?, ¿cómo íbamos a saberlo?, ¿por qué alguien tiene el tupé de decir aquí que “estamos aprovechando la ausencia de legisladores para violar la Constitución”?, ¿acaso esos legisladores no sabían de esta fecha y no la votaron? Además, ¿cómo podía saber el resto de esta Cámara cuántos legisladores o quiénes no iban a estar presentes?

Para iniciar esta sesión y para empezar a debatir este tema es necesario el quórum de la simple mayoría; algunos legisladores, expresando su voluntad, están aquí presentes debatiéndolo, y algunos, también expresando su voluntad política, no están presentes, de manera que la expresan a través de su ausencia. Entonces, señor presidente, no hay aquí ningún aprovechamiento de la situación para tratar de sortear –me remito a la brillante argumentación vertida por el legislador Brügge– un obstáculo constitucional que no es tal. Quizás sea ésta, precisamente, la mayor debilidad del argumento de la oposición.

No podemos perder de vista, señor presidente, señores legisladores, la voluntad política expresada en el sentido que la oposición ejerza este cargo. Entre todas las expresiones aquí vertidas, alguien mencionó al pasar –quienes amamos desde siempre esta doctrina no podemos pasar esto por alto– que cuando se modificó la Constitución del año '49 se hizo con una interpretación también abyecta, sancionándosela con los dos

tercios de los presentes, y agregó: “así fue como nos fue, hacia adelante”, pretendiendo decir que la causa de los males que con posterioridad a la Constitución del '49 ha sufrido nuestro país se debe precisamente a la manera de sanción de esta Constitución. Cuán equivocados están, señor presidente, respecto de la interpretación y el análisis de la historia y cuánto estamos escondiendo de las responsabilidades políticas que nos tocaron en todo este tiempo.

Asimismo, señor presidente, se dijo aquí: “la clase política tiene por único objetivo ganar, y entonces no sirven otros valores”. Me pregunto, señor presidente, ¿qué significaba ese grito de guerra –“¡todo o nada!”– del 2 de septiembre? No era otra cosa que una expresión también fascista por la que se considera que no importan las leyes, la Justicia, ni sus fallos, sino ganar sí o sí. Eso, señor presidente, también forma parte de un “camisa negra” que habita esta Provincia: apretar, coaccionar, amenazar, torcer la voluntad de los legisladores también tiene el mismo signo político y la misma persona detrás.

No aceptamos de ninguna manera, desde el punto de vista político, que no se resalte que la oposición, desde hace un tiempo y por decisión del Gobierno de Unión por Córdoba, no sólo tiene la posibilidad de controlar a través de sus legisladores los actos de gobierno sino, además, la de designar a quien tiene la potestad constitucional de hacerlo, que es el Defensor del Pueblo.

Alguien dijo que era necesario revisar este Instituto, que era necesario darle competencia procesal, debatir modelos de gestión, ver de qué se va a ocupar el Defensor del Pueblo, y dijo que era importante que esta Legislatura cediera la decisión de otorgarle el carácter de “institución útil” a la sociedad. Hace falta que la Legislatura hace muy poco tiempo sea clara al respecto, esto lo dijo un legislador preopinante, que presentó en esta Legislatura hace muy poco tiempo, un proyecto de ley por el cual solicitaba convocar a los señores legisladores, dentro del plazo de 30 días de aprobada la presente y en fecha a determinar por la Comisión de Labor Parlamentaria, para que proceda a la elección y el nombramiento del Defensor del Pueblo, de acuerdo a los términos del artículo 124 de la Constitución provincial y conforme al procedimiento y disposiciones establecidas en la Ley 7741, y en ningún párrafo de sus fundamentos menciona lo que aquí ha pedido. Hace dos meses

que presentó este proyecto de ley para que esta Legislatura se abocara a su tratamiento porque es el organismo responsable de regularizar la situación referida a la designación del Defensor del Pueblo. Ha pedido que la Legislatura revise la institución, e hizo una serie de aseveraciones sobre cómo podíamos mejorarla; sin embargo, estaba más interesado en que designáramos al Defensor del Pueblo que en modificar el carácter de la institución.

Señor presidente: cuando se designó por primera vez al doctor Filippi como Defensor del Pueblo, era un reclamo de toda la sociedad que quien ejerciera ese cargo no debía ser un miembro del partido gobernante. Me permití buscar en los archivos periodísticos porque, luego de la designación del doctor Filippi, aquellos que hoy representan a ese “camisa negra” del que le hablaba, señor presidente, no plantearon la necesidad de que el Defensor del Pueblo fuera elegido por la oposición, ni siquiera plantearon la necesidad de contar con los dos tercios de los votos, a tal punto que la crónica periodística del miércoles 15 de diciembre de 1994 dice que el doctor Filippi recibió una cálida despedida de sus pares, aunque los conceptos que provocaron mayor emoción en el diputado saliente provinieron de los peronistas Luis Juez y Horacio Obregón Cano.

Hoy, los adláteres de ese “camisa negra” vienen a argumentar aquí la necesidad de las mayorías especiales, de los dos tercios; vienen a argumentar acerca de políticas moralistas que ellos mismos no han sabido respetar, ni hacia adentro de su pseudo partido, ni hacia la sociedad, al no aceptar lo que la Justicia determinó cuando hicieron un planteo.

Por eso, señor presidente, desde el punto de vista político, esta Legislatura debe tener la voluntad de que un cargo de esa naturaleza se resuelva por la vía política, y no argumentar cuestiones constitucionales porque han sido demostradas y refutadas por el legislador Brügge; debe atender la necesidad de los que estamos aquí presentes, que tenemos la voluntad de estar, participar y debatir, y el derecho a elegir esta noche al Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.

Sra. Dressino.- Señor presidente, vamos a

tratar de tomar algunas de las cuestiones que planteó el legislador Heredia, que nos van a permitir –de algún modo- retrotraernos a los compromisos de quien hoy es oficialismo en este recinto, de compromisos asumidos y nunca cumplidos.

Señor presidente, es cierto que hace mucho tiempo que deberíamos haber estado discutiendo esto. En octubre de 2004, presentamos en esta Legislatura un proyecto referido a las atribuciones y competencias del Defensor del Pueblo, proyecto que aún continuamos rehabilitando porque el oficialismo nunca quiso tratarlo.

Antes de analizar el contenido del proyecto, voy a aclarar dos o tres cuestiones que me parecen importantes. La política siempre debe estar en el marco de la Constitución, cuando está fuera de la Constitución es autoritarismo, no es democracia. Hoy estamos discutiendo una institución política en el marco de las normas que establece la Constitución.

En ese sentido, señor presidente, debo decirle al legislador Heredia que entiendo que se discute en el marco de la Constitución siguiendo la única interpretación que ella tiene: “las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara”. Quiero dejarlo en claro porque no es política en cualquier lado, como dice el legislador Heredia con argumentos constitucionales, es política en el ámbito de la Constitución.

No comparto la interpretación que se ha hecho, y disiento con algunos amigos correligionarios que trajeron la propuesta a este recinto, porque entiendo que es contraria al texto y al espíritu de la Constitución. Me parece que es una interpretación maquiavelista, en el sentido que el fin de la designación no puede justificar -cualquiera sea el designado- la interpretación de las dos terceras partes de los presentes, es de la “totalidad” del Cuerpo, señor presidente.

Dijo el legislador Heredia que hace mucho tiempo deberíamos haber discutido esto, y es cierto; hace cinco años que esta legisladora presentó el proyecto. Dijo también, el legislador, que Unión por Córdoba era quien había producido un avance sustancial con la designación de un hombre de la oposición en la Defensoría del Pueblo. Seguramente le faltó leer los comunicados, las gacetillas de prensa que se emitían desde la Casa de Gobierno en el año 2000 -las cuales son públicas,

aunque no sé si todavía estarán cargadas, yo las tengo desde hace mucho tiempo-, en las que, frente al compromiso de que fuese un hombre de la oposición, el día 5 de febrero de 2000, el doctor Filippi expresó: “La modificación en la legislación procesal y las facultades investigativas han sido condiciones básicas para la aceptación de estas funciones. En ese sentido, el Ejecutivo presentará un nuevo proyecto y creo que en dos meses y medio ya puede estar resuelto”. Esto fue en febrero de 2000 y estamos en setiembre de 2008. Estos son los compromisos del Gobernador De la Sota -ya que el legislador busca que lea todo.

Aún hoy no presentaron los proyectos para que la figura del Defensor del Pueblo tenga las atribuciones y facultades investigativas que se comprometieron a darle en el año 2000.

Señor presidente, aunque algún legislador no lo quiera escuchar, la institución es “raquítica” porque ha sido decisión política del oficialismo mantenerla en esa condición; y esto es debido a que el Defensor del Pueblo no puede hacer nada: no tiene facultades para investigar por sí mismo, no tiene criterio propio de investigación -debe pedirle autorización a la Administración-, no tiene facultades para efectuar inspección a ninguna dependencia administrativa y, por ello, las actuaciones no tienen inmediatez ni celeridad ya que no puede pedir la comparecencia personal de un testigo, de un empleado público o de un denunciante, o sea, de nadie que le pueda proporcionar algún dato para la investigación; tampoco puede pedir el auxilio de la fuerza pública para mejorar el desempeño de su labor investigativa; no puede pedir el concurso de la Justicia para obtener la remisión de documentación porque no tiene legitimación procesal activa y no puede concurrir a la Justicia.

En el año 2004, al cumplirse 10 años de la institucionalización definitiva de la institución, el Defensor del Pueblo de la Nación dijo: “si bien la función del Defensor del Pueblo es detectar disfunciones en la Administración, se lo ha provisto de una herramienta esencial para llevar a cabo su función, se trata de la legitimación procesal para acudir a la Justicia en defensa de los derechos ciudadanos”.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, con las miserables atribuciones con que

cuenta, en estos últimos días ha salido fervorosamente a reclamarle al Estado nacional la deuda que tiene con la Provincia. ¿Usted cree que los señores funcionarios de la Secretaría de Transporte están procesados por pedido del Defensor del Pueblo porque éste tiene las atribuciones que tiene el Defensor acá? No, señor presidente. El Defensor del Pueblo de la Nación puede investigar, citar, solicitar auxilio a la fuerza pública y concurrir a la Justicia porque tiene facultades y atribuciones; el Defensor del Pueblo de Córdoba no puede hacer nada porque ustedes hace cinco años que tienen un proyecto "planchado" en la comisión, por decisión política del bloque del oficialismo.

Esto, señor presidente, no es por casualidad; este Gobierno no quiere que nadie lo investigue o controle, que el Fiscal Anticorrupción no lo investigue, que el Defensor del Pueblo no tenga atribuciones, que el Fuero Anticorrupción no tenga recursos y no sea eficiente, para seguir con los gastos reservados y, que cuando se les ocurra, dejar de pagar las partidas presupuestarias. Un día se les ocurrió que necesitaban plata, entonces hicieron un decreto, modificaron una ley y dispusieron que a partir del 1° de enero del año 2003 ustedes no pagaban más el déficit de retiro del sistema policial. ¿Por qué? Porque no querían o porque les hacía falta la plata para otra cosa. Este Gobierno no quiere que nadie lo controle. Acá no se aprueba un solo pedido de informes, y si se aprueba no se contesta.

Entonces, les informamos que fue el radicalismo quien sentó la oposición en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, no en una Defensoría del Pueblo para, después, no darle ninguna atribución con el fin de que no pueda controlar a nadie.

Espero, señor presidente, porque el Gobernador De la Sota antes de irse tuvo un gesto -parcial, pero gesto al fin- otorgándole legitimación procesal al Defensor del Pueblo. Pero los legisladores lo han omitido, silenciosamente, tal vez por eso de "a rey muerto, rey puesto", entonces, se fue De la Sota y no existen más leyes que haya enviado oportunamente el Gobernador. Ahora, ¿nadie se acordó de este proyecto enviado por el entonces Gobernador De la Sota?

Ya que lo urgente tapó lo importante, y creo que lo importante era discutir qué Defensor del Pueblo queremos, para qué queremos que nos sirva: para que la gente se sienta defendida, para que las empresas de servicios públicos no hagan

lo que quieran, para que las aguas contaminadas no maten a los chicos en la ciudad de Córdoba. Para eso queremos un Defensor del Pueblo.

Por lo menos, repito, ya que lo urgente tapó lo importante traten este proyecto, enviado por quien fuera su gobernador durante 8 años; no sé qué tendrán para objetarle, pero, al menos, otórquenle legitimación procesal activa para actuar.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.

Sr. Varas.- Señor presidente: cada vez va quedando más claro. Está claro que la sinrazón necesita del agravio, de la intolerancia, de la demonización de los oponentes políticos, de la descalificación.

Pero el agravio no solamente se trasunta en una actitud patoteril acá, sino también con la gente, entonces, quitarle el derecho de hacer reclamos a través de instituciones es parte del mismo esquema. A esto, cuanto menos -más allá de los oídos sordos-, lo tenemos que decir.

El legislador preopinante de la mayoría decía que uno de los que aplaudía era Luis Juez. Haciendo un ejercicio de memoria debo decir que en aquel momento el compañero Luis Juez, hoy líder del Frente Cívico y Social, militaba en el peronismo y, seguramente, el legislador preopinante lo votó.

Por otra parte, cuando salí hace unos minutos, hablando respecto al tema, gente del pueblo -de Punilla en particular- me referían que en una época el ex legislador, mandato cumplido, Decara -hoy postulado para la designación como Defensor del Pueblo- y el ex legislador Caserio -hoy ministro del actual Gobierno- compartieron algunos días de debate, algunas discusiones seguramente enriquecedoras. Entonces, me tomé el atrevimiento de pensar: ahí está, allí nació el "affectio societatis" que hoy necesita tener permanencia en el tiempo, lamentablemente con fines "non sanctus". Y ¿sabe algo? Quien lo denunció, a quien hacía mención el doctor Juan Manuel Zuriaga, paradójicamente trabaja en el ámbito del mismo Ministerio.

Entonces, quiero hacer una última reflexión: ¿quién nos va a defender del Defensor del Pueblo?

Nada más.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Domingo Carbonetti.

Sr. Carbonetti.- Señor presidente: he es-

cuchado atentamente las fundamentaciones que se han venido desarrollando en este recinto, y cuando se pasa el tamiz -y tenemos que enfocarnos sobre el núcleo de lo que ha sido la esencia de estas exposiciones- vemos que sólo tangencialmente y en algunos pequeños párrafos las expresiones de los legisladores que se oponen han sido referidas a los dos puntos que deberían haber sido los ejes de este debate: la justificación en cuanto a la mayoría agravada para votar la designación del Defensor del Pueblo y, en última instancia, las circunstancias que se refieren a la persona del candidato propuesto.

Indudablemente, todo lo demás ha sido para “vestir” –entre comillas- expresiones que reiteradamente manchan y tratan de generar sospechas, dando lugar a circunstancias que luego quienes hablan toman como un agravio personal, sin medir que son ellos los que generan esa misma circunstancia.

Vengo en este caso como un legislador que ha estudiado Derecho, ejercido activamente la profesión y que no tiene ninguna marca académica que pudiera exaltar sus palabras. Sin embargo, no me quedan dudas de que la razón que abona el voto de este bloque está absolutamente consustanciada con la letra y espíritu de la Constitución de Córdoba.

Escuchando inicialmente a un legislador que abriera el debate opositor, luego de una serie de argumentaciones terminó proponiendo un candidato en nombre de su bloque sabiendo –o debiendo saber- que, por lo que aquí se ha expresado y es de pleno conocimiento, tampoco reuniría el número de votos necesarios del que ellos hablan.

En este caso, quiero hacer una reflexión circunstancial, porque aquí también se dan por sentado los 47 votos, fracturando los decimales que hablan de los 70, y por aproximación de la mayoría o pasando la mitad se dice que son 47 cuando, en realidad la primera interpretación posible, señor presidente, es que los dos tercios de 70 son 46 y que el decimal 0,66 debería dejarse de lado.

Asimismo, con respecto al legislador Asbert, suscribo sus expresiones, si bien las ha manifestado en términos latinos, personalmente las interpreto en el sentido que uno no debe distinguir

donde la ley no distingue. Entonces, al leer la norma que establece la forma de designación del Defensor del Pueblo le pregunto, señor presidente, a través suyo: ¿dónde dice que debe tratarse de los dos tercios del total de los miembros?

La interpretación que sostiene este bloque está en línea absoluta con lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 30 –que aquí también se ha citado- y en correspondencia absoluta con que la necesidad de la reforma “debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros”.

Siguiendo la tesis o el concepto de la Constitución Nacional, al referirse a la designación del Defensor del Pueblo su artículo 86 dice: “Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes”. ¿Cómo se lo ha tratado de disfrazar ante tanta claridad en la norma? Explicando que si son 257 diputados y 72 senadores, el número lo haría imposible. Estamos hablando de la misma institución, de los mismos principios, y deberían reunir los mismos requisitos.

Si se hace una lectura sistemática y no subjetiva de la Constitución, del Derecho Público Provincial, se podrá observar que en ella hay tres hipótesis establecidas: cuando prevé miembros presentes; cuando prevé la totalidad del Cuerpo y cuando omite explicitarlo. Estas son las tres circunstancias que establece la Constitución.

Quienes ejercen la oposición lo hacen porque no tienen el número de votos, porque no les satisface el candidato o por aquello de “me opongo porque es una propuesta que ha generado un consenso que a mí no me conviene”. Indudablemente, en estas circunstancias uno no puede apartarse de los términos que establece la Constitución. Ya dije en otra oportunidad que hay una regla de vieja data que establece que cuando una norma es clara y emplea determinados términos, hay que ajustarse a ellos.

Si la disposición constitucional no expresa que es la totalidad del Cuerpo ¿por qué nosotros deberíamos exigirla, haciendo realidad lo que decía el legislador Asbert? ¿A título de qué, señor presidente?

Indudablemente, si en la Constitución no está puesto, como sí está consignado expresamente cuando habla de otras circunstancias, co-

mo magistralmente lo ha expresado nuestro compañero de bancada, el legislador Brügge, respecto al fallo de la Sala Juzgadora en el caso del Juicio Político, la declaración de la necesidad de la reforma constitucional, y la declaración de la intervención de los municipios, ¿por qué allí el legislador dijo que eran dos tercios de la totalidad del Cuerpo y cuando habló del Defensor del Pueblo no lo dijo? Entonces, la única interpretación válida debe estar en línea con lo que establece la Constitución de la Nación: que el Defensor del Pueblo se elige con mayoría agravada, pero de los miembros presentes en el momento de la votación.

El legislador Maiocco ha hablado aquí de fraude. Apelando a la memoria en estas circunstancias, debo decir que el único fraude que yo recuerdo en Córdoba es el de las Tiendas Mechi, señor presidente. (Aplausos). He querido borrar el principio que dice que todos piensan que los otros son de su misma condición, pero que lo que fue indudable, reconocido y probado en la historia de Córdoba fue la elección fraudulenta en que se comenzó a votar una semana antes de la fecha en que se había convocado a la ciudadanía de Córdoba a expresarse en la Consulta Popular sobre el agua.

En estas circunstancias, señor presidente, los términos de la Constitución de la Provincia de Córdoba son absolutamente compatibles, claros, terminantes y están en línea con las normas de la Constitución Nacional. Por eso, vamos a ratificar en todos sus términos nuestra aprobación para que el ciudadano Decara sea designado Defensor del Pueblo de la Provincia. Asimismo, solicito que, en caso de que esta propuesta reúna los dos tercios de los miembros presentes, luego de que sea aprobada, en el supuesto que se encontrara el designado en la Casa, se establezca el día de hoy como fecha de juramento, de modo que éste le sea tomado ante las autoridades de este Cuerpo.

Nada más. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: en primer lugar, quiero rescatar la figura de mi amigo, el ex Intendente de San Francisco, Hugo Madonna, discrepando con las palabras de mi par de bancada, legislador Dante Rossi. No obstante, me dejó conforme porque tampoco le supo decir a esa mujer –yo lo hubiera hecho– que siguiera a su jefe político, doctor Carlos Becerra; es más, se lo voy a ha-

cer llegar para que sepa que también lo escondió. Digo esto por el respeto que me merece la figura de un ex intendente, con quien tuve la precaución de hablar ante la publicidad de un diario.

Por otra parte, escuché atentamente al legislador Varas, quien más que legislador parecía un pastor, o el secretario general de una congregación religiosa. (Aplausos). Digo esto, señor presidente, porque es secretario general de uno de los gremios más combativos, la UOM, y habla como si estuviera dando una misa; para colmo...

Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, legislador Nicolás, el legislador Varas le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Nicolás.- No se la concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- ¿Sabe por qué digo esto, señor presidente? Si tiene algún antecedente policial por algún delito que haya cometido, le estamos proponiendo que lo lleve a la Justicia, porque nadie lo eligió como fiscal de ningún político. Hoy, es legislador de la Provincia de Córdoba y Secretario General de la UOM, y no de una comunidad religiosa.

Quiero dejar esto bien claro para que quede salvaguardado el honor de Mario Decara; pueden castigarlo votándole en contra, pero nadie tiene derecho a llenarse la boca con denuncias sin pasar por la Justicia –como muchas veces se hace–; tampoco puede efectuar denuncias en esa comunidad religiosa de la que es secretario general; de todos modos, supongo que él habrá hecho sus planteos en donde debe. No hay que confundir los roles, señor presidente, porque pinta de pastor –a decir verdad– no tiene.

Por su parte, el presidente de la bancada del Frente Nuevo –recurriendo a una metáfora futbolística– nos comparó con una “barrera que se agacha”; por mi exceso de peso, es cierto que puedo estar en la barrera, aunque tal vez no pueda jugar al fútbol, pero él debe tener una condición brillante como acróbata, señor presidente, porque los constitucionalistas hacen interpretaciones tales como: que falta uno, que no falta el otro. Además, tuvo sumo cuidado cuando se refirió a la Reforma de la Constitución: habló de la del '49, de la del '94, pero no de la que hubo entre ellas, donde la Unión Cívica Radical fue castigada por buscar la tercera reelección del doctor Eduardo César Ange-

loz, esa reforma constitucional se dio porque nadie pensó mal del legislador. Un viaje intempestivo a Costa Rica fue lo que hizo que después se llenaran la boca con su reelección. No tienen que cuestionar, miran la paja en el ojo ajeno y no en el propio. No sé que título ponerle al circo por las acrobacias que hace; imagínese, nos hablan de barreras y en una “tumba” cayó en Puerto Rico; nos lleva una ventaja bárbara.

Lo vamos a dejar ahí, porque no he venido a discutir con ninguno de mis correligionarios, al contrario, siento por todos ellos un especial respeto, pero todo tiene su límite. A Varas le digo que no se llene la boca.

Ninguno de los legisladores cuestionaron el honor del candidato que proponemos, se puso -reitero- en una situación que, le aseguro, le queda grande.

El artículo 124, bien lo dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, fue utilizado en junio del año 2000, cuando fue elegido Nelson Filippi. Si observan las versiones taquigráficas, verán que son los mismos argumentos que se utilizaron esta noche. Se hizo la reforma, y acá tengo los dos artículos escritos, para aquellos que saben de la Constitución más que yo, y los dos son iguales. Se hicieron tantas críticas a Nelson Filippi, sin embargo, los constituyentes del año 2001 lo calcaron, lo único que cambiaron fue que en el año 1987 decía: “reunidos en Asamblea”, y acá dice: “en la Unicameral”. Uno advierte que el criterio era dejar firme esa jurisprudencia, pero ninguno de los que hoy se llenan la boca hicieron el planteo donde corresponde, que es en la Justicia.

Por eso, señor presidente, ratifico mi posición de que esta Cámara adopte el criterio de los “dos tercios de los presentes” para designar a Mario Decara como Defensor del Pueblo.

Escuché atentamente al legislador Birri cuando hizo su exposición, lo único que le puedo decir es que el hecho de que él tenga más conocimientos que uno no le da derecho a tratar a aquellos que no comparten su criterio como si hubiésemos hecho un contubernio político para llegar a tan alta Magistratura.

No hace mucho el “pastor Varas” llegó a la Vicepresidencia de esta institución con el voto aquellos a los que hoy les dice “corruptos”. ¿No tienen memoria? Los tratan de “fraudulentos” pero

cuando les toca el voto para ellos se hacen olímpicamente... -puntos suspensivos, estamos fuera del horario de protección al menor.

Por eso digo, señor presidente, que ratificamos en un todo...

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, el legislador Ortiz Pellegrini le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Nicolás.- No, señor presidente. Tal vez un par de meses antes sí, ahora no.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con el uso de la palabra, legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Decía que ratificamos en un todo a Mario Decara como Defensor del Pueblo, y que se adopte el criterio antes mencionado. (Aplausos).

Ahora sí tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: el único que puede otorgar el uso de la palabra es quien preside la sesión.

El legislador Rossi había solicitado la palabra antes que el legislador Ortiz Pellegrini.

Tiene la palabra el señor legislador Rossi.

Sr. Rossi.- Señor presidente: simplemente quiero hacer una aclaración por haber sido aludido.

En primer lugar, me siento absolutamente reconfortado con la gente con la que milito desde hace veinticinco años en la Unión Cívica Radical.

Por otra parte, quiero decir que algunos hablaron con la persona que nombraron para ver si le podían hacer cambiar el criterio que tenía respecto a la designación de Mario Decara. En aquel momento valía y parece que ahora no.

Gracias.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Yo fui.

Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador Nicolás, tiene que solicitar el uso de la palabra.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Soy muy impulsivo.

Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo, pero trate de controlar sus impulsos así “ley pareja no es rigurosa”.

Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: voy a ser muy breve y me dirijo, por su intermedio, al legislador Nicolás.

Miguel, es muy triste tu papel: reírte y ser bufón para que la "claque" se ría.

Nada más.

Sr. Presidente (Fortuna).- Señores legisladores: les pido que no usen determinados calificativos respecto de otros legisladores.

Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.

Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural queremos que se nos haga una aclaración. Se ha hablado mucho de los candidatos y mucho más aún del modo en que se van a contar los votos y, en ese sentido, es muy importante para este bloque tener en claro cuál va a ser el criterio que se va a adoptar para el recuento de votos, porque no queremos participar de acciones anticonstitucionales.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar, señora legisladora, le recuerdo que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria fue acordada la propuesta, ratificada en su primera intervención y recién por el legislador Miguel Nicolás, de que, antes de proceder a la votación de los postulados para el cargo de Defensor del Pueblo -uno por la Unión Cívica Radical y otro por el Frente Cívico-, se ponga a consideración la propuesta que interpreta que la designación del Defensor del Pueblo se realiza con la "mayoría agravada de dos tercios de los legisladores presentes".

Voy a poner en consideración esa propuesta y después pediré que por Secretaría se lea, con absoluta claridad, el resultado de la votación.

En consideración la propuesta que interpreta que la designación del Defensor del Pueblo debe realizarse con los votos de la mayoría agravada de los dos tercios de los legisladores presentes.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Señora legisladora Olivero, quiero informarle que, en primer lugar, voy a dar el resultado de la votación, y posteriormente le voy a dar el uso de la palabra.

Por Secretaría se lee el resultado de la votación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Hubo 46 votos por la afirmativa sobre 66 legisladores presentes.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente, creo que se me ha dado la palabra tarde porque yo no iba a participar en el conteo de una votación en la que no se incluye a nuestro bloque en la interpretación del artículo 124. Usted no me ha dado la libertad...

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora, usted no me solicitó la palabra, si lo hubiera hecho previo a la votación se la hubiera otorgado.

Durante el desarrollo de la sesión, en ningún momento le he impedido el uso de la palabra. Es más, cuando ha solicitado el uso de la palabra y ha estado hablando otro legislador, lo que ha hecho esta Presidencia es solicitar la interrupción correspondiente. Si usted quiere, puede solicitar la reconsideración.

Sra. Olivero.- Señor presidente, quería preguntarle porque no comprendí...

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora, usted es presidente de bloque y miembro natural de la Comisión de Labor Parlamentaria, que es la encargada de hacer los acuerdos antes de iniciar la sesión, y en el día de la fecha se dejó perfectamente claro, además de las propuestas que formularon aquí los legisladores que hicieron uso de la palabra -el último fue el legislador Miguel Nicolás-, cuál iba a ser el mecanismo de la sesión.

No pretenda que se interprete que se le coartó en algún momento su libertad o la posibilidad de abstenerse en la votación cuando siempre se le ha dado esa autorización cuando lo ha solicitado.

Continúe con el uso de la palabra, legisladora.

Sra. Olivero.- Esa es su interpretación, yo tengo la mía. Entonces, voy a pedir la reconsideración. Me voy a retirar en el momento que se ponga a consideración en este Pleno si vamos a votar por una interpretación en particular. No voy a ser cómplice, la letra del artículo 124 es clara; habla de los dos tercios de la totalidad de los miembros de esta Cámara.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por la legisladora Liliana Olivero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.

Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este bloque Concertación Plural solicitamos a esta Cámara la autorización para abstenernos en la votación del Defensor del Pueblo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Pondré en consideración oportunamente la moción efectuada por la legisladora preopinante.

Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: el Frente Cívico considera que la Constitución “no es de goma”, por lo tanto, ha decidido no legitimar con su presencia la votación y se va a retirar de la sesión especial hasta que la misma termine.

Nada más.

– El bloque del Frente Cívico se retira del recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.

Sr. Maiocco.- Señor presidente: vamos a actuar en igual sentido, como lo dijimos en Labor Parlamentaria, lo aclaro para que no me diga que esto no se dijo. Hoy, por el voto de una mayoría simple, se está resolviendo un tema para el artículo 124 que exige una mayoría agravada.

Por no compartir este criterio –y lo dije en la Comisión de Labor parlamentaria- al igual que el Frente Cívico, me voy a retirar hasta que se vote la designación.

Sr. Presidente (Fortuna).- Yo también le digo, legislador, que no es por una mayoría simple, ya que son 46 votos sobre 66.

Puede retirarse, señor legislador.

– El legislador Maiocco se retira del recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.

Sr. Ruiz.- Señor presidente: el bloque del ARI-Coalición Cívica también se retira de esta votación por considerar que la misma es inconstitucional, al no respetarse uno de sus artículos que indica que esta votación debe hacerse con el voto de 47 miembros de esta Legislatura.

– El bloque del ARI-Coalición Cívica se retira del recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.

Sr. Alesandri.- Señor presidente: deseo conocer si la propuesta de designación por parte del Frente Cívico va a ser mantenida y, en ese caso, si la persona propuesta está en la sala y va a continuar en la misma.

Sr. Presidente (Fortuna).- No veo a ninguno de los legisladores que habían propuesto al Padre Alessio para el cargo de Defensor del Pueblo, por lo que le voy a dar la palabra al legislador Rossi.

Sr. Rossi.- Señor presidente: en nombre de los legisladores Cugat, Dressino, Giaveno y quien habla solicitamos autorización para abstenernos de votar.

En segundo término, quiero dejar aclarado que, en caso de que se dé la hipótesis del legislador Carbonetti de que puedan rastrear al propuesto Defensor del Pueblo –que no creo que esté más lejos de La Tasca o El Quijote- anoticiamos que no vamos a participar de semejante violación del artículo 124 de la Constitución.

Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento se pondrá en consideración la solicitud formulada.

Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.

Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero manifestar mi desacuerdo con el retiro del recinto y con la abstención de votar que se ha solicitado. Considero que debemos hacernos cargo de lo que votamos.

No avalo la interpretación constitucional que se hace –pido que conste en actas- pero voy a estar presente para manifestar mi voto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.

Sr. Faustinelli.- Señor presidente: hay 6 legisladores de la Unión Cívica Radical que van a respaldar con sus votos la postulación de Mario Decara. Indudablemente, ya fue claro mi correligionario Dante Rossi acerca de la abstención de cuatro legisladores del bloque.

Sin embargo, quiero manifestar que en los próximos días este bloque va a estar muy unido cuando planteemos el debate sobre la primera minoría porque creemos en la Justicia y en la resolución judicial que estableció que la primera minoría es para la Unión Cívica Radical en aquella sesión de 7 de diciembre del año pasado. Vamos a discutirlo porque nunca estuvo más claro que hoy en el

ejemplo numérico que puso en esta sesión el doctor Ortiz Pellegrini cuando se dio vuelta y me dijo que 14 son más que 12, matemáticamente también le respondo con números y le digo que hoy 12 es igual a 12, más a nuestro favor porque el partido que obtuvo más votos en las boletas sabía para tener representación en esta Legislatura ha sido la Unión Cívica Radical.

Nada más.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace uso de la palabra, corresponde poner en consideración la moción formulada por la legisladora Silvia Rivero solicitando autorización para que el bloque Concertación Plural se abstenga de votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

En consideración la solicitud de abstención en la votación para los legisladores Rossi, Giaveno, Dressino y Cugat.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción de designar Defensor del Pueblo de la Provincia al señor Mario Decara.

Les pido a todos los legisladores que mantengan la mano en alto para contar los votos positivos.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

Por Secretaría se enunciará el resultado de la votación.

Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):

Al momento de la votación hubo 53 legisladores presentes. Además de los cuatro ausentes, se retiraron del recinto los legisladores Olivero, Jiménez, Coria, Bischoff, Seculini, Rodríguez, Lizzul, Maiocco, Ruiz, Ortiz Pellegrini, Birri, Varas y Serra.

Al momento de la votación, por la afirmativa lo hicieron 46 legisladores, 6 legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical; 37 legisladores del bloque Unión por Córdoba-Frente para la Victoria; el legislador Dandach del Movimiento de Acción Vecinal; el legislador Villena del Movimiento Patriótico; y el legislador Albarracín del

bloque Recrear.

Se abstuvieron en la votación los legisladores presentes Rossi, Giaveno, Dressino, Cugat, Rivero y Asbert.

Votó por la negativa la legisladora Genesio de Stabio.

Sr. Presidente (Fortuna).- De esta manera, con el resultado expresado por Secretaría, queda designado el ciudadano Mario Alberto Decara como Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

Por Secretaría se realizarán las comunicaciones pertinentes y se publicará oportunamente en el Boletín Oficial. (Aplausos).

En consideración la moción formulada oportunamente por el legislador Domingo Carbonetti en el sentido que el designado Defensor del Pueblo jure y asuma el cargo el día de su designación.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.

Sra. Rivero.- Señor presidente: deseo comunicar que el bloque Concertación Plural se retira en este momento para no avalar una acción que ha sido hecha en abierta violación de la Constitución de la Provincia.

– El bloque Concertación Plural se retira del recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito un breve cuarto intermedio en sus bancas hasta que se haga presente el designado Defensor del Pueblo, el señor Mario Alberto Decara.

– Es la hora 21 y 53.

– Siendo la hora 21 y 58:

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.

Invito al señor Mario Alberto Decara a subir al estrado a prestar el juramento de ley.

– Jura por Dios y la Patria, el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, el señor Mario Alberto Decara. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito al legis-

lador Héctor Lobo que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto. Por otra parte, pido a los señores legisladores que permanezcan en sus bancas para dar por concluida la sesión especial y posteriormente comenzar con la sesión ordinaria.

– Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.

– Es la hora 22 y 01.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo